

LA REVOLUCIÓN DEL ARCOIRIS Y SU ESCALA DE GRISES

MOVIMIENTO INDÍGENA
EN EL ECUADOR

Stalin Herrera Revelo

La revolución del arcoiris
y su escala de grises:
movimiento indígena
del Ecuador

La revolución del arcoiris
y su escala de grises:
movimiento indígena
del Ecuador

Stalin Herrera Revelo

 **EN
MOVIMIENTO**

 **CLACSO**



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampin - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial

Julián Rebón y Bernardo Mançano Fernandes - Coordinación de la colección

Herrera Revelo, Stalin

La revolución del arcoiris : movimiento indígena del Ecuador / Stalin Herrera Revelo. - 1a ed. -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2022.

Libro digital, PDF - (En movimiento)

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-813-379-9

1. Pueblos Originarios. 2. Movimiento Social. I. Título.

CDD 305.8

Corrección: Licia López de Casenave

Diseño de cubierta: Ezequiel Cafaro

Diseño y diagramación: María Clara Diez



© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

El contenido de este libro expresa la posición de los autores y autoras y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>



Suecia

Sverige

Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

Índice

Presentación En Movimiento	7
Introducción.....	9
Fractura de la condición “premoderna”	13
Ascenso y disputa por la representación.....	35
Cambios progresistas para la movilización....	61
El retorno de las élites y la movilización popular.....	89
Reflexiones finales.....	113
Bibliografía.....	121
Siglas	131
Sobre el autor	135

Presentación

En Movimiento

La potencia de las luchas sociales se destaca en los trazos de la historia reciente y en la geografía de nuestra América. Diferentes movimientos y, en ocasiones, verdaderas rebeliones ciudadanas han empujado cambios en los tiempos sociales y políticos de nuestra región. Estas luchas ponen en cuestión desde la práctica colectiva los clivajes de la desigualdad persistente, los modelos de desarrollo excluyentes y ecológicamente no sustentables, así como la anemia democrática y el autoritarismo. En su desenvolvimiento vetan gobiernos y políticas, promueven demandas que desbordan los canales institucionales, constituyen identidades colectivas, configuran territorios como resistencias y existencias, factualizan experiencias de transformación y superación, renuevan el debate público, ponen *En Movimiento* a la sociedad. Pero la movilización no es patrimonio exclusivo de los sectores populares, ni de las fuerzas progresistas y las izquierdas.

También se hacen presentes acciones colectivas de diverso tipo que se activan en respuesta a avances logrados por estas luchas y por las experiencias de gobiernos populares. La política de las calles y de los campos representa así un elemento significativo en la disputa por el futuro y el horizonte del cambio. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales pone a disposición de las y los lectores esta colección de libros que, en clave de difusión, se propone dar cuenta de los principales movimientos, revueltas y conflictos de la América latina y el Caribe del siglo XXI. Desde diferentes tradiciones del pensamiento crítico y las ciencias sociales, la biblioteca *En Movimiento* pone en debate la riqueza y el protagonismo de estas luchas y los senderos de transformación que abren.

Bernardo Mançano Fernandes
Julián Rebón

Introducción

Para todas aquellas personas que tienen algún conocimiento e interés por la política en América Latina, es sabido que los movimientos indígenas son un actor en la dinámica política. El problema es que, desde mediados del siglo XX, desde Chiapas a la Patagonia, indígenas, campesinos y mujeres rurales, o si prefieren *campesindios* como los define Armando Bartra –el célebre campesinista mexicano–, se han movilizado y han puesto en debate sus proyectos, demandas y sueños. En esa enorme geografía de disputas, el movimiento indígena ecuatoriano, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) a la cabeza, ocupa un lugar destacado.

Cuando en 1990 este movimiento sacudió el país con el levantamiento de Inti Raymi, nadie imaginó que se convertiría en el actor político más importante de las tres últimas décadas. Su estructura organizativa de base comunal ha hecho del movimiento un actor poderoso en las calles y su

capacidad de movilización lo han convertido en el lugar de agregación política en el cual convergen otros movimientos, sin los cuales tampoco sería posible su historia; podríamos decir que son parte del movimiento en una concepción más amplia de la *convergencia callejera*.

En un país marcado por la impronta colonial y ordenado por un persistente racismo estructural, reconocer el valor del movimiento en la configuración de la política de las últimas tres décadas, y con esto, la configuración de la sociedad y del Estado, sintetiza en unas pocas palabras el valor de dicho movimiento. Ahora, su historia es bastante más compleja. Su emergencia, desarrollo y transformación han sido un proceso acelerado, vertiginoso y exitoso en muchos aspectos. Solo para mencionar uno, sus tesis sobre estado plurinacional, interculturalidad, derechos de la naturaleza, derechos colectivos, son parte de la constitución y de un debate más amplio que intenta construir nuevas epistemes y utopías; además, hoy no es posible una izquierda que no debate la etnia, la interculturalidad o la plurinacionalidad.

Sin embargo, más allá de sus épicos levantamientos y marchas, las historias de los movimientos sociales también están plagadas de contradicciones, ambivalencias y ambigüedades. De la misma forma que el movimiento no es el mismo

que en los noventa, sus tesis no tienen el mismo eco, muchas de sus propuestas son puestas en tensión bajo la necesidad de actualizarse frente a los cambios que le exige su dinámica interna y su relación con los otros. A treinta años de su debut, su vitalidad política y sus efectos en la sociedad nos exigen abrir los ojos, actualizar las herramientas y los balances de época.

Este texto no intenta construir una hipótesis explicativa de lo que es o no el movimiento indígena en el Ecuador. Su intención es construir un relato del proceso que, si bien, se ordena cronológicamente en función de los momentos álgidos de la disputa y de la relación con los distintos gobiernos, expone sus contradicciones en la perspectiva de abrir preguntas que nos permitan enlazar su historia, con la complejidad de sus luchas y un futuro abierto; un terreno para seguir pensando, investigando y actuando. Además, para los y las nuevas investigadoras del tema, puede usarse como una selección de textos que les permita tener una inmersión comprensiva.

El presente texto se dispone en seis secciones que ordenan los momentos del movimiento en relación con el carácter de las disputas: 1) *La fractura de la condición “premoderna”*, que recoge las hipótesis sobre aquellas condiciones que permitieron su emergencia política. 2) *Ascenso y*

disputa por la representación, en donde se describe el vertiginoso proceso de resistencia al neoliberalismo y su creciente peso en la política nacional y representación de los movimientos sociales. 3) *Cambios progresistas para la movilización*, que recoge las tensiones del movimiento con el gobierno de la Revolución Ciudadana y sus efectos para la organización. 4) *El retorno de las élites y la movilización popular*, el cual describe el proceso complejo de emergencia de las élites y la Insurrección de Octubre, un momento que nos permite poner en discusión la potencia transformadora y los límites del movimiento. 5) *Reflexiones finales*.

Fractura de la condición “premoderna”

Sismo étnico

El 29 de mayo de 1990, un grupo de doscientos indígenas tomaron la iglesia de Santo Domingo en el centro de la ciudad de Quito. La acción desató una movilización “sin precedentes”. Los indígenas ocuparon las calles y plazas, cerraron las vías y paralizaron la Sierra desde Cayambe en el norte y hasta Saraguro en el sur; además, en varios puntos tomaron haciendas a modo de presión para la solución de conflictos por la tierra. Además, reclamaban su derecho a vivir como *indígenas con derechos*.

¿Por qué estamos aquí? Por avanzar, por reclamar nuestros derechos. Aquí no estamos para que la gente del pueblo se burle de esa manera compañeros. No es que queramos ir contra el pueblo. No es que queramos escoger la raza. Nosotros queremos unificar, sentir al pueblo de parroquias con el pueblo indígena. Tienen que colaborar. Tienen también que participar. Porque tienen plata, se sienten altos. Eso no lo permitiremos. Por eso hemos le-

vantado los indígenas. Queremos ser reconocidos en nuestra cultura, en nuestra filosofía, en nuestra ciencia. Son 500 años de opresión, dominación y marginación. Son 500 años de saqueo. Por eso estamos en pie de lucha (6 de junio, 1990, Somos Ecuatorianos, en *Punto de Vista*).

Señores autoridades: sus padres, sus tatarabuelos, fueron españoles que explotaron, violaron, ensangrentaron al pueblo indígena de Guamote. Pero no nos han terminado. La lucha no es por locos, ni tampoco por groseros, ni tampoco por rebeldes, ni tampoco compañeros por agresión. Es por el derecho del indígena (7 junio, 1990, Guamote, en *Punto de Vista*).

La enorme movilización desató un “debate” que, en su momento, expuso el complejo lugar que los indios ocupaban en la sociedad. A la iglesia habían llegado demandando la resolución de setenta conflictos represados en el Instituto Ecuatorianos de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), pero bajo el brazo se encontraban la defensa de sus territorios, la Ley de Nacionalidades Indígenas y el Estado Plurinacional.¹ Así, más allá de la tierra y la

1 El Estado Plurinacional era un proyecto aún en construcción y que avanzaba en el debate de las organizaciones

reforma agraria, que en su momento hizo temblar al *viejo régimen terrateniente*, los indígenas llegaron con una propuesta compleja, la defensa de su autonomía y la construcción de una sociedad distinta, el Estado Plurinacional.

La reacción de las élites y de la sociedad en defensa de sus privilegios fue inmediata. La reforma agraria y el reparto de tierras amenazaba el derecho de los propietarios y la “seguridad jurídica” de los empresarios; para los militares, el estado plurinacional amenazaba la seguridad nacional; para los intelectuales orgánicos del régimen, los indios intentaban dividir el país y llevarlo a la prehistoria; para el gobierno, eran una masa de incautos engañados y manejados por los comunistas; los hacendados, sin temor o vergüenza, llamaron al gobierno a poner orden a sangre y fuego; los más críticos resaltaron que la movilización expresaba la desigualdad histórica. En común, se levantó un discurso por la nación y el futuro “mestizo”,

indígenas, si bien aún no había una “propuesta escrita”; el Acuerdo de Sarayaku en el cual ya estaba la Ley de Nacionalidades, que se presentó en 1989, y el libro *Nuestro proceso Organizativo* en el cual hacía explícito que el proyecto era el Estado Plurinacional.

Yo, y me llamo blanco, podría formar nacionalidad aparte con los demás descendientes de daneses, pero soy un mestizo incorporado a este medio. En lo religioso, cultural y sanguíneo. ¿Cómo voy a desconocer que vengo de Huayna Capac, de Sebastián de Benalcázar y de sus dos compañeras indígenas –centroamericanas–, de Isabel Ibacache, cacica de Caranqui; de Inés Ramírez, indígena de Popayán; y de los Mollacaña, caciques de Quero; de dos indígenas llamadas “Luisa” que compartieron sus vidas con dos fundadores de Quito... todavía me falta ubicar un millón de antepasados más? Y políticos historiadores ¿de dónde vienen? Y, las llamadas nacionalidades indígenas: ¿de dónde vienen? ¿Se pasaron, acaso, los quinientos años metidos en la botella del mago de la lámpara maravillosa de Aladino? ¡Demuéstrenlo! ¿Vamos, acaso, a una nacionalidad única o a diecinueve nacionalidades parroquiales? (Antonio Monteserrín, *El Comercio*, 10 junio, 1990).

(...) un tratado territorial, pone de manifiesto ese verdadero contenido político del movimiento indígena, su afán de ignorar la historia, borrar 500 años de mestizaje y volver al siglo XV. El documento de la CONAIE, su estilo y los pedidos son ciertamente un esfuerzo de arcaísmo, un sueño sin asidero alguno en la realidad del Siglo XX (Fabián Corral, *El Comercio*, 3 septiembre, 1990).

Entre las demandas de los indígenas y la defensa de la nación mestiza había un punto irreconciliable, la sociedad y el sistema político que se habían construido sobre la dominación de herencia colonial. Los indígenas ponían en cuestión la pirámide de explotación que se había organizado a lo largo de la historia. Si miramos los dos testimonios anteriores, era evidente que los indios no habían pasado quinientos años metidos dentro de una botella, pero era igualmente evidente que las élites hacían el esfuerzo de recuperar su historia y con ella intentaban legitimar la estructura de privilegios; no era la historia del millón de antepasados y millones más que ocupan la base de la pirámide, menos de aquellos que ocupaban las calles y plazas.

Tras la toma de la iglesia y paralizar la Sierra Centro, los indígenas expusieron sus exigencias.

1. Declaración del Ecuador como estado plurinacional.
2. Entrega de tierras y legalización territorial de las nacionalidades.
3. Solución a los problemas de agua y riego.
4. Condonación de las deudas con FODERUMA y Banco Nacional de Fomento.
5. Congelación de precios de los artículos de primera necesidad.
6. Terminación de obras prioritarias en las comodidades.
7. No pago del predio rústico.
8. Expulsión del Instituto Lingüístico de Verano, según decreto de 1981.
9. Libre

importación y exportación comercial y artesanal para los miembros de la CONAIE. 10. Control, protección y desarrollo de los sitios arqueológicos por parte de la CONAIE. 11. Oficialización y financiamiento por el Estado de la Medicina indígena. 12. Derogatoria de decretos que han creado organizaciones paralelas a los consejos seccionales. 13. Entrega inmediata de fondos presupuestarios para las nacionalidades indígenas. 14. Entrega de recursos permanentes para la educación bilingüe. 15. Respeto real a los derechos del niño, sin demagogias. 16. Fijación de precios justos a los productos campesinos y autonomía en el mercado (*Hoy*, 29 junio, 1990).

En la disputa, las organizaciones accedieron a trabajar en mesas de diálogo que se extendieron hasta finales del año y se diluyeron entre amenazas de nuevas movilizaciones por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y las respuestas burocráticas por parte del gobierno. En ese momento, el avance no parecía ser mayor, pero en medio del debate se plantearon dos temas que serían parte del porvenir.

Por un lado, los indígenas exponían una subjetividad política que los situaba como actores de su historia.

Los compañeros están alegres diciendo que hemos ganado esta guerra, hemos enfrentado y hemos ganado. Ahora no tenemos miedo a nadie, ni al pueblo de San Pablo ni a ningún pueblo. Desde ahora vamos a salir más adelante, con más coraje; aunque vengan los perros policías, aunque venga cualquiera. ¡Nosotros vamos a seguir hasta morir enfrentando! ¡Nosotros no vamos a salir de aquí (José Tocagon, vicepresidente de Huaycopungo, en *Punto de Vista*, 11 junio, 1990).

Por otro lado, los o las articulistas lograron situar el momento del movimiento.

...las sublevaciones y levantamiento de indígenas fueron procesos locales y escaramuzas, en los años 20 inicia un primer proceso de organización de los huasipungueros frente a los hacendados que luego migran hacia la lucha por la tierra en los años 50, de los 50 a los 70 sus reivindicaciones son “clasis-tas” aunque la lucha también es por la reconstitución de territorios perdidos, pero desde los años ochenta asistimos a una lucha claramente ética. Las comunidades crecieron de 1078 en 1960 a 1961 en 1988 –años previos al levantamiento– convirtiéndose así en el sector de la sociedad civil más organizado (Levantamiento Indígena: Un nuevo rostro, en *El Hoy*, 10 de junio de 1990).

Las sublevaciones del siglo XVIII unían a las reivindicaciones particulares de tierra, rechazo al tributo, a las mitas, etc. a la idea de reconstitución de los señoríos étnicos, es decir, era un proyecto de los indios para los indios, no tenía por tanto una capacidad nacional, interétnica, ni pluriclasista. Hoy en cambio, el proyecto indio une a las reivindicaciones particulares de tierra, agua, servicios, crédito, precios, etc. una propuesta nacional, pluriétnica y multiclasista: la idea de la Constitución de un estado Plurinacional justo, solidario y democrático. Por tanto, la reivindicación india no se queda en sí mismos, si no convoca a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. (...) ¿Será posible que el gobierno ecuatoriano proce- se desde una perspectiva renovada este conflicto? (El levantamiento: Continuidades y rupturas, en *El Comercio*, 11 junio 1990).

Hacia 1990, el levantamiento indígena daba un salto cualitativo en la subjetividad y organización política. Aunque los trabajos de Albornoz (1971) y Moreno Yanes (1976) describen la importante presencia de luchas y sublevaciones indígenas en el Ecuador, y la misma CONAIE (1989) enlaza su historia con las luchas indígenas frente a la conquista, los años noventa condensan un nuevo proceso de organización que “empieza” en los años veinte con

la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), afiliada al Partido Comunista, la “primera organización de indígenas” que expresaba la alianza entre los trabajadores y los “campesinos”; se intensifica con la lucha por la tierra entre los años cincuenta y setenta, período en el cual nacen casi todas las organizaciones que dan forma a las organizaciones.

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 1989:
Organizaciones regionales, organizaciones de segundo grado y años de fundación

Amazonía	Sierra	Costa
Regional: Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), en 1980.	Regional: Ecuador Runacunapac Riccharimui (ECUARUNARI) en 1972.	Regional: La Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE).
Organizaciones de Segundo grado: Federación de Centros Shuar, 1961. Asociación Independiente del Pueblo Shuar Ecuatoriano (AIPSE) en 1976. Federación Provincial de Organizaciones Campesinas del Napo (FEPOCAN), inicia la discusión, 1969.	Organizaciones de Segundo grado: Unión Provincial de Cooperativas Agrícolas de Producción y Comercio del Cañar (UPCC) en 1968. Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI) en 1974.	Organizaciones de Segundo grado: Gobernación Tsáchilas en 1970. Federación de Centros Chachis en 1978. Federación de Centros Awá (FCA) en 1980.

Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN) en 1969.	Pichincha Riccharimui, en 1974, Federación Campesina de Bolívar-Bolivarmenta
Federación de Comunas Unión de Nativos de La Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) en 1984. Jatun Comuna Aguarico (JCA) en 1986.	Runacunapac Richarimui (FECAB-BRUNARI) en 1972. Fundación Runacunapac Yachana Huasi en 1972.
Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), 1979.	Unión de Campesinos del Azuay (UNASAY) en 1974.
Nacionalidad Huao Huaorani, en 1987.	Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIC) en 1980.
Nacionalidad A'í Cofan, 1989.	Unión de Comunidades Indígenas de Calderón (UCIC) en 1980. Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH) en 1983. Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) en 1984. Unión de Indígenas Salasacas en 1985.

Luego, el arduo trabajo por la construcción de una representación propia en los años ochenta avanza hacia la construcción de una representación nacional, la CONAIE. Pero la movilización de miles de indígenas, que paralizó al país por algo más de una semana en 1990, marcó el principio del *movimiento indígena*

ecuatoriano como lo conocemos hoy. Antes de esto, los levantamientos, las rebeliones y las sublevaciones no lograban sortear los límites de su condición “premoderna” o “prepolítica”: la lucha de carácter local que era diezmada por la acción militar o que se negociaba en nuevos arreglos para “reformular” el viejo orden.² La movilización de 1990 proyecta al movimiento indígena a una escala nacional. La Ley de Nacionalidades Indígenas –la lucha por el reconocimiento de sus territorios y autonomía– les permitió un consenso interno y el Estado Plurinacional logró traducir el proyecto de sociedad en la cual no están solo los indios, sino que se levanta como un proyecto para el conjunto y los “universaliza”.

Hubo muchas hipótesis para explicar el acontecimiento, hay quienes acertadamente observaron

2 Esta dinámica de rebeliones y reformas presente en el mundo campesino es parte de un largo debate que se encuentra dentro de la izquierda: una mirada que, si bien se hereda de una mala apropiación de un pasaje de Marx en el *18 Brumario de Luis Bonaparte*, el cual hace referencia a los campesinos cual saco de papas. Pero será el texto de Eric Hobsbawm, *Rebeldes primitivos*, de mediados del siglo XX, que describe la acción política “premoderna” como las condiciones materiales de las luchas campesinas, propias del siglo XIX, y las contraponen a la capacidad de universalización de las luchas que logra la pelea por la tierra, la alianza con los trabajadores y el partido; una tesis claramente asociada a Gramsci.

cómo la crisis y retirada del Estado había creado un caldo para la efervescencia social (Zamosc, 1994; Ospina y Guerrero, 2003). Pero el nuevo momento marcó un *cambio de época*, la base de la pirámide de explotación cuestionaba el orden de la sociedad, no solo como subalternos que se defienden y “hablan”, sino que demandaban para sí un lugar para escribir la historia. ¿Qué había ocurrido en la sociedad para que los indios se plantearan una tarea de tal envergadura?

Ocaso del régimen hacendatario

Tras el despliegue de 1990, varias y varios investigadores se dieron la tarea de explicar aquel *sismo político* (Almeida Iliana, 1993; Almeida José, 1993), y en su ejercicio observaron que hacia los años ochenta, el campo aún se caracterizaba por la presencia del *régimen de hacienda* o *gamonal*, que mostraba una compleja trama de relaciones y actores locales, instituciones formales y no formales de las que, además del hacendado que en muchos casos no vivía en la hacienda, participaban las élites criollas mestizas, indígenas con ciertos privilegios, capataces, prestamistas, chicherías,

curas, escribanos, tinterillos, tenientes políticos, etc. Una compleja trama de actores que vivían de la subordinación/explotación de los indígenas (Burgos Guevara, 1970). Hablamos de un régimen de explotación y/o una *semántica de la dominación* codificada en las relaciones materiales y simbólicas entre las comunidades indígenas y la hacienda (Guerrero, 1991), pero que sobrevivía codificada en las prácticas cotidianas del conjunto de la sociedad y el Estado, el *colonialismo interno* (Burgos Guevara, 1970).

Hacia finales del siglo XX, el régimen de hacienda no había muerto, pero vivía su “ocaso” resultado de varios procesos; por un lado, el avance del capitalismo en campo y la expansión del Estado³ generaban profundos cambios en las relaciones de poder que habían dominado los territorios; aun así, las élites tuvieron la fuerza

3 Entre los procesos más importantes que marcaron el siglo XX estuvieron la crisis de las exportaciones de cacao a fines del siglo XIX y principios del siguiente; la expansión de las ciudades intermedias y el mercado interno entre los años treinta y cincuenta; la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial que afectaron las exportaciones y a los grandes hacendados; los cambios en los rubros de exportación hacia el banano (boom bananero); la expansión de la exploración y exportaciones petroleras en los años setenta que sirvió para la modernización del Estado.

suficiente para sortear las transformaciones, quedarse con las mejores tierras y usar las políticas estatales para “modernizarse” (North, 1985). En la Costa, a pesar de la presión campesina, las elites se recuperaron rápidamente y, gracias a las crecientes exportaciones, no solo mantuvieron el poder territorial, sino que lograron sintonizar los intereses de los campesinos (Herrera Revelo, 2017). Por otro lado, si bien las leyes de 1964 y 1973 no fueron suficientes para quebrar el viejo régimen de hacienda, en su ocaso, la presión cotidiana y *asedio* de la tierra empujó el reparto o venta de tierras (Velasco, 1979; Thurner, 1990). Así, Mientras las organizaciones campesinas en la Costa perdían espacio frente a las élites y se integraban a la demanda de productos agroindustriales de exportación o de consumo interno; el levantamiento indígena le puso el rostro político a la larga lucha de las comunidades indígenas, que molecularmente abrió las brechas que la disolución de la hacienda dejaba en los campos. Hacia 1990, el viejo régimen de hacienda perdía capacidad de control territorial y subordinación del mundo indígena, y en su repliegue, eran las comunidades y las organizaciones indígenas las que avanzaban recuperando la representación local y reconquistando territorios (Carrasco, 1993; Korovkin, 1993).

Los indios modernos y la modernidad de los indios

Para Lentz (1999), las transformaciones de la sociedad y la migración hacia la costa, abrieron un momento distinto; las comunidades indígenas ampliaron sus redes y sus procesos de acumulación, al mismo tiempo que cambiaron su *posición* y valorización frente a la sociedad blanco-mestiza. Una posición que expresaba un largo proceso de secularización que, entre la organización del primer sindicato “El Inca” en Pesillo (1927) y el levantamiento indígena de 1990, promovió la organización y, con esta, la emergencia de una nueva camada de dirigentes.

Antes estaban los cabecillas, los más viejos dirigentes que lucharon contra el hacendado, ellos son los primeros en rebelarse, son lo que llegaron a estas tierras y pelearon desde el tambo, organizaron la comunidad y definieron las normas de la distribución de tierra, por eso ellos tienen más tierra. El Jorge es un dirigente más joven, estudió en la escuela de los curas, él es dirigente primero con la comunidad, luego con la organización de segundo grado, el MIC y ahora es autoridad (Fabiola Quishpe, 2013).

A diferencia de los viejos dirigentes, los *cabecillas* que habían liderado en sus comunidades la resistencia molecular frente a la hacienda y la lucha por la tierra, la nueva camada nació de la acción de los partidos de izquierda; a estos se fueron sumando aquellos que nacieron del proceso secular de la “modernización” de la sociedad; indígenas que sabían leer y escribir como resultado de la expansión de los procesos de alfabetización que la iglesia y el estado promovió tardíamente en los años ochenta (Valarezo, 1993).

Las experiencias obtenidas en las luchas por la Reforma Agraria. La situación de discriminación social, económico, cultural y político de nuestro pueblo. La presencia cada vez mayor de un grupo de estudiantes y profesionales indígenas que conscientes de la problemática de nuestro pueblo apoyaron la Organización. Es este sector, el que a través de las escuelas en las comunidades realizó un trabajo organizativo de base y en la zona urbana, fomentó la creación de grupos indígenas a nivel social, cultural y deportivo, que buscaron la revaloración de nuestra cultura y su difusión (FICI, en CONAIE, 1989).

Los nuevos héroes míticos de este proceso son los indios escolarizados, que aprendieron en Escuela el español, los derechos civiles, el conocimiento del mundo blanco-mestizo, pero que no abandona-

ron su identidad india, convirtiendo esos conocimientos en arma de lucha. Arma nueva, reveladora, codiciada, poderosa, lucharon y lucharon hasta definir su ley (Valarezo, 1993, p. 366).

Nos referimos a los indígenas que salían de los procesos de profesionalización del Fondo de Desarrollo Rural Marginal (FODERUMA), el programa de Desarrollo Rural Integral (DRI) y un poco más tarde las ONG (Ibarra, 1999); camadas de profesores del sistema de educación intercultural bilingüe, los indígenas que salían de la catequesis y la disputa de conciencias que la Iglesia de la liberación había realizado con monseñor Leónidas Proaño. Fueron décadas de grandes cambios, pero es importante resaltar que los viejos actores de subordinación –el Estado, la iglesia y los terratenientes– también habían cambiado, la iglesia de liberación, los mestizos alineados con los partidos de izquierda y las políticas de gobierno promueven una alianza por la organización indígena.

La nueva camada de *intelectuales orgánicos* tendría la tarea de leer su propio proceso organizativo (CONAIE, 1989) y traducir la heterogeneidad socio-cultural en una propuesta para el conjunto de la sociedad indígena y no indígena (Ibarra, 1999). Así, el Estado plurinacional aparece como el proyecto político que, si bien había sido introducido en los

años ochenta por los militantes de izquierda,⁴ se había hecho carne en el debate de las organizaciones pues lograba recoger una realidad, la existencia de varias sociedades que conviven de manera abigarrada y subordinada.

El movimiento indígena creó instrumentos conceptuales y discutimos la coherencia de nuestros postulados teóricos con la práctica cotidiana. Así, adoptamos el concepto de nacionalidad indígena entendida como una comunidad de historia, lengua, cultura y territorio; luchamos porque se reconozca el carácter plurinacional, pluriétnico y plurilingüe de la sociedad ecuatoriana; por el reconocimiento de los territorios nativos en tanto son la base de nuestra subsistencia y de la reproducción social y cultural de las diferentes nacionalidades; por el respeto a la diversidad e identidad cultural, por el derecho a una educación en lengua nativa con contenidos acordes a cada cultura; por el derecho al desarrollo autogestionario y por el derecho a tener una representación política que permita defender nuestros derechos y levantar nuestra voz (CONAIE, 1989).

4 Según Valarezo (1993), Ileana Almeida, recogiendo la experiencia de la Unión Soviética y las propuestas de Lenin, fue la primera en usar el término para exponer la situación de los indígenas en el Ecuador.

Según Ospina y Guerrero (2003), la propuesta siempre generó muchas preguntas y no logró dar respuestas claras para su aplicación concreta, con lo cual resultó ambigua. Sin embargo, estaba presente antes de la movilización, era parte del debate político, fue defendida por el Partido Socialista y estuvo en los discursos del mismo presidente Rodrigo Borja (1988-1992) de la Izquierda Democrática.

La crisis de la izquierda

El asombro que produjo la movilización tuvo que ver con el despliegue territorial y masividad de la acción, pero la debilidad de su entorno político, en especial la izquierda, tuvo un gran efecto en el debate. La CONAIE reconoce que la alianza entre trabajadores y campesinos de principios de siglo fue central para la emergencia, las organizaciones “modernas”, la lucha por la tierra, la formación de cuadros y canalizar algunas de las demandas; sin embargo, la izquierda era un actor que asumió un rol de *intermediación* que no logró incorporar las demandas de las organizaciones indígenas en constitución.

La crítica más común es que, en la tradición de izquierda, el actor central de las transformaciones eran los sindicatos y trabajadores, los campesinos eran aliados y los indígenas, un problema que no cabía en la ecuación revolucionaria. Para las organizaciones indígenas, era parte de la fractura con el conjunto de intermediarios (iglesia, izquierda, partidos) que, no solo no lograban recoger las demandas de los indígenas, sino que disputaban la organización y la representación indígena.

Desde el punto de vista de los mediadores el problema indígena se redujo únicamente al aspecto económico y se enmarcó dentro de la lucha de clases, en tanto campesinos. No sólo se dejó de lado a gran parte de la población indígena (la que estaba fuera de la hacienda), sino que tampoco se tomó en cuenta la globalidad del problema. (...) a pesar de que la lucha y las reivindicaciones de los sindicatos campesinos estuvieron hegemónizadas por el punto de vista de los mediadores (...) Cuando pedíamos mejores condiciones de vida no era simplemente mejoras salariales, sino que exigimos que se acabe el discrimen, los maltratos, los abusos, etc., a los que habíamos estado sometidos durante siglos por el hecho de ser indígenas (CONAIE, 1989).

La disputa era más compleja. Para la izquierda, el eje de organización eran los sindicatos, los ejes de disputa eran la reforma agraria, el reconocimiento de jornadas laborales de 8 horas y salarios justos, como el resto de los proletarios. Mientras que para las organizaciones significó posicionar otras demandas vinculadas con la lucha por la tierra, territorio, autonomía, cultura, identidad, reconocimiento de saberes ancestrales; una lucha contra la discriminación y la opresión.

Si bien el movimiento sindical logró cierta masividad hasta finales de los años ochenta, en la década siguiente asistimos a una clara crisis del conjunto del campo popular, y en especial las organizaciones de izquierda y de los trabajadores. La emergencia del movimiento se produce en medio de esa crisis y, a diferencia de otras regiones donde la alianza con la izquierda marcó el rumbo de los movimientos indígenas campesinos, su crisis abre un escenario político-organizativo, tal como advierte Valarezo en 1993:

Este proyecto nuevo tiene la enorme potencialidad de ofrecer una interpretación alternativa del proceso de la sociedad ecuatoriana, y arroja elementos para desafiar a la modernidad. No es un discurso simplista, ni dogmático, ni fundamentalista: todo lo contrario, recoge los más importantes

matices que el pensamiento ha creado en el Ecuador. Es un producto intelectual de las dirigencias, y es un movimiento subterráneo del conjunto de la sociedad. El levantamiento indio fue un encuentro coyuntural, enriquecedor y cuestionador de ambas tradiciones (p. 370).

El movimiento indígena, sin saberlo, en 1990 se sitúa en un lugar que hasta ese momento había sido el imperio de la izquierda, renovando las narrativas utópicas para organizar la sociedad. Como ya se dijo, un momento en el cual rompen con las ataduras de la disputa local y se articulan sobre un proyecto que tiene el potencial de universalizarlos.

Ascenso y disputa por la representación

El movimiento como centro de articulación

Si bien, la CONAIE era una apuesta política de articulación, la ECUARUNARI y la CONFENIAE,¹ hacia 1990 apenas se las conocía en el escenario político caracterizado por dos grandes procesos. Por un lado, el avance del neoliberalismo, la crisis económica y el creciente empobrecimiento de los sectores populares; y por el otro, la crisis del movimiento obrero y la creciente diversificación de la política plebeya con la multiplicación de los movimientos sociales en la lucha por la ampliación de derechos.

1 Según la CONAIE (1989), dada la creciente promoción de las organizaciones indígenas, la ECUARUNARI y la CONFENIAE promovieron el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONACNIE) en 1980, cuyo objeto era la articulación y promoción de las nacionalidades. Será en el primer Congreso de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en 1986 que se da paso a la CONAIE.

Si observamos el conjunto de acciones realizadas en el período 1990-2000, nos encontramos con una disputa que, a muy grandes rasgos, pasa de la lucha por la tierra/territorios a la constitución de una opción política electoral.

Año	Levantamientos, movilizaciones y acciones políticas relacionadas con el movimiento indígena (1990-2006)
1990	El primer levantamiento indígena nacional por el reconocimiento de los diversos pueblos y nacionalidades y la entrega de tierras en el Oriente ecuatoriano.
1991	Movilización de los pueblos amazónicos por el reconocimiento de sus territorios ancestrales.
1992	Movilización por el reconocimiento de quinientos años de resistencia indígena, negra y popular, denunciando el carácter colonial del Estado y el discurso de “encuentro y descubrimiento” que ocultaban el genocidio y la imposición de la Conquista española.
1994	Proyecto Político de la CONAIE.
1994	Movilización contra la Ley de Modernización Agraria del gobierno de Sixto Durán Ballén.
1995	Articulación con la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) para impulsar la campaña por el No en el referéndum para la privatización de las áreas estratégicas del Estado, planteado por el gobierno de Sixto Durán Ballén.
1995	Creación del Movimiento Plurinacional MUPP-NP-Nuevo País.
1996	Participación de MUPP-NP en las elecciones: el movimiento alcanza el 21% de las votaciones en el Congreso Nacional y gana en 24 municipios. Articulación de la CMS, en la perspectiva de construir un frente amplio de resistencia al neoliberalismo.
1997	Nuevo levantamiento que culminó con la caída del entonces presidente Abdalá Bucaram del Partido Roldosista Ecuatoriano.

Año	Levantamientos, movilizaciones y acciones políticas relacionadas con el movimiento indígena (1990-2006)
1998	Configuración de Asambleas de los Pueblos (cantonales y nacionales) como referentes ético-políticos que cuestionan la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente de ese mismo año.
1999	Levantamiento y toma de Quito en contra del anuncio del gobierno de Jamil Mahuad de retirar el subsidio al consumo del gas y la debacle del sistema nacional financiero bancario.
2000	Levantamiento que culminó con la caída del ex presidente Jamil Mahuad, del partido Democracia Popular, y la participación en el triunvirato que duró pocas horas y que terminó con la llegada a la presidencia del entonces vicepresidente, Gustavo Noboa.
2001	Levantamiento para evitar se retire el subsidio al consumo de la gasolina durante los primeros meses del año, durante el gobierno del presidente Gustavo Noboa.
2002	Movilización contra la anunciada firma del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.
2003	Conformación de la alianza entre MUPP-NP, el Movimiento Popular Democrático y el Partido Sociedad Patriótica para impulsar la candidatura de Lucio Gutiérrez a la presidencia.
2004	Gana las elecciones Lucio Gutiérrez.
2005	Se rompe la alianza y el MUPP-NP sale del gobierno declarándose en oposición, argumentando una traición ideológica y política del gobierno. Cae Lucio Gutiérrez en abril de este año.
2005	Levantamiento contra la anunciada firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Las primeras movilizaciones (1990, 1991, 1992) y la presentación del proyecto político de la CONAIE (1994) consolidan el debate sobre la “singularidad” del movimiento, la afirmación de demandas y de

un discurso propio claramente diferenciado, pero sobre todo aglutinador de la enorme heterogeneidad del propio movimiento (no olvidemos que hablamos de tres regiones, veinticuatro pueblos y catorce nacionalidades distintas).

Para algunas lecturas era una propuesta culturalista que dejaba de lado las demandas estructurales y para los sectores dominantes, la nueva emergencia solo prometía más atraso; pero la respuesta del movimiento situaba la discusión en dos planos: la lucha por el reconocimiento y la lucha contra la desigualdad, en una combinación de demandas “étnicas” y de clase. Así, el proyecto político de la CONAIE de 1994 planteaba:

Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, luego de largos años de resistencia y lucha combativa, nos hemos organizado para poner fin a cinco siglos de opresión, miseria y pobreza; y tenemos como objetivo primordial construir un Estado Alternativo, y la instauración de un Gobierno Plurinacional Democrático que vele por los intereses de todas las Nacionalidades que conformamos el Ecuador, y garantice el bienestar material y espiritual de la familia, de la comunidad y de la sociedad en general.

Nuestra lucha va más allá de las simples reivindicaciones aisladas. Nuestra lucha propugna so-

lucionar los postergados problemas de la tierra y territorialidad. La industrialización, el desempleo y subempleo, de la vivienda, de la educación, de la salud, y la terrible lacra social y humana de la discriminación y segregación racial.

Nuestra meta no es la simple toma del poder o gobierno sino la transformación de la naturaleza del actual poder del Estado Uninacional hegemónico, excluyente, antidemocrático y represivo; y construir la Nueva Sociedad Humanista Plurinacional. Nuestra lucha es una opción frontal contra el sistema económico, político e ideológico capitalista hegemónico, represivo y esclavizante, tanto nacional como internacional que impide la Autodeterminación, y la Independencia económica y política de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, y de los demás sectores sociales del Ecuador.

Nuestra lucha pretende restablecer los derechos políticos y económicos colectivos negados por los sectores dominantes, a través de todos los medios institucionales, o agotando el último recurso de Autodefensa permitido por los organismos internacionales y por la Constitución vigente; por ello este proceso liberador demanda el concurso de todos los sectores explotados y oprimidos del país.

La CONAIE planteaba que su lucha iba más allá de la tierra y demandas para sí mismos, sino que se trataba de un proyecto para el conjunto de la sociedad. Observaba que el atraso y los problemas eran el resultado de las élites, el Estado y el modelo. Además, situaba a las nacionalidades como alternativa política y económica del futuro. Lejos de las anclas campesinas y localistas, si bien su propuesta no negaba su “condición indígena campesina”, la lucha por la tierra, el territorio, la autonomía y el autogobierno, situaba al Estado Plurinacional como la herramienta para la transformación y “modernización alternativa” de la sociedad; sin abandonar la lucha contra la explotación y desigualdad, se podían encontrar claves para la construcción de una sociedad no capitalista (humanista que integra la vida de la naturaleza, política y economía comunitaria, la unidad en la diversidad, democracia comunitaria, plurinacionalidad, etc.) (CONAIE, 1994).

De este modo, desde 1990, la CONAIE se convertía en un interlocutor para las organizaciones y pueblos indígenas; en 1992 avanzaron con la marcha de los Pueblos Indígenas en defensa de sus territorios y contra los quinientos años de colonización, y se articularon a la disputa más general contra el neoliberalismo. En ese contexto, en 1994 las élites lanzaron la Ley de Desarrollo Agrario y en

1995 un referéndum para reforzar las privatizaciones a nombre de la modernización estatal; en el primer caso, aunque se paralizó el país y más de 40.000 indígenas tomaron las calles en Chimborazo, los indígenas perdieron la disputa; en el segundo caso, se produjo una articulación amplia y el nacimiento de la Coordinadora de Movimientos Sociales que, junto al movimiento indígena, tomaron las calles y lograron posicionar el NO, ganándole al gobierno.

El neoliberalismo no era cosa nueva, pero para el movimiento indígena eran las primeras acciones que lo ubican en el polo de oposición y eje articulador del conjunto de actores en el campo popular. Miguel Lluco (2000), un dirigente de la CONAIE, recoge muy bien el momento:

Esa capacidad de combinar la dimensión social y económica de la explotación del capitalismo, con la dimensión histórico cultural de la opresión a nuestra propia identidad ha sido la mayor fortaleza del movimiento indígena ecuatoriano. 1990 marca un hito en nuestra historia. El levantamiento de mayo y junio protagonizado por cientos de miles de indígenas a lo largo y ancho del país logra por fin visibilizar nuestra presencia. Dejamos de ser “pobres indios” para unos, y apenas “campesinos menores de edad” para otros. La sociedad se ve obligada a reconocer en nuestra lucha una presen-

cia vigorosa. En 1992 las nacionalidades amazónicas realizaron una marcha histórica para exigir el reconocimiento de sus territorios; en 1994 enfrentamos el intento de imponernos una ley agraria reaccionaria; en 1995 participamos activamente en la campaña en contra de la privatización de la seguridad social. Tras cada uno de estos momentos de movilización hay una enorme carga de vida, esfuerzo, entrega y esperanza. Es el impulso de esa minga por la vida que ha permitido que el movimiento indígena logre inspirar, impulsar, acompañar y aprender con nuevos actores sociales que han ido configurándose en estos años. Particularmente hemos acompañado la constitución de la Confederación de Afiliados del Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC), y la Coordinadora Nacional Campesina, las organizaciones de trabajadores energéticos, movimientos urbano populares, ecologistas, de mujeres, agrupados actualmente en la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS).

Esos primeros años permitieron la articulación de esos muchos actores que desde los ochenta pugnan por la ampliación de derechos y resistían al neoliberalismo. La década de los noventa se llenó de movilizaciones convocadas por trabajadores, campesinos, mujeres, organizaciones barriales, cristianos de base, estudiantes e indígenas. En

1995 organizaron el Movimiento Plurinacional Pachakutik-Nuevo País y se lanzaron a las elecciones en 1996 (sobre el tema reflexionaremos más adelante). Una de sus propuestas era el impulso de una nueva constituyente por el estado plurinacional y lograron una primera representación política propia en el Congreso.

Hacia 1997 promovieron la caída de Abdala Bucaram, quien, además de seguir adelante con el neoliberalismo y un plan de convertibilidad inspirado en Argentina, lanzó una estrategia política de cooptación que generó fuertes tensiones al interior del movimiento. Sin duda, la acción política del movimiento indígena fue determinante, pero el proceso era el resultado de la confluencia amplia de varios movimientos, organizaciones indígenas-campesinas (CONFEUNASSC, FENOCIN), la Coordinadora de Movimientos Sociales, las organizaciones de mujeres y las centrales sindicales que articularon el Frente Patriótico; y además, miles de personas agitadas por la indignación. Según los medios, en la movilización llegaron participar 3 millones de personas (Barrera, 2001, p. 228).

En aquel momento, la propuesta de una constituyente por un Estado plurinacional era una demanda del movimiento indígena, pero en el contexto fue acogida por el Congreso como estrategia para reducir la presión y se instaló en la agenda del

gobierno de Fabián Alarcón. Finalmente, impulsaron la nueva Constituyente (1998) y a pesar de la intención de las élites de restringir su participación, levantaron asambleas populares para criticar la legitimidad de la Constituyente y el sistema político vigente; el ejercicio fue masivo, con una amplia participación de diversos actores que encontraron en la convocatoria un espacio de debate.

Al final de la década, el balance no fue el mejor. La caída de Bucaram y la nueva constitución no pudieron frenar la agenda neoliberal; a diferencia de las expectativas del movimiento, las élites mantuvieron el control del proceso y aprovecharon la nueva Constituyente para impulsar su agenda que entre el 1992 y 1995 se había detenido por la presión social y la consulta popular (Guerrero y Ospina, 2003, p. 200).

Allí, el movimiento indígena propuso la declaratoria del carácter de plurinacionalidad del Estado ecuatoriano, pero finalmente transó esta declaratoria por la incorporación de los derechos colectivos en la Constitución. Un paso importante pero insuficiente si se toma en cuenta la importancia política y estratégica que ha implicado la noción de plurinacionalidad para el movimiento indígena. La Constituyente de 1998, en realidad significó una profunda derrota política

para el movimiento indígena. (...) Contradictoria y paradójicamente, la incorporación de los Derechos Colectivos en la Constitución, con toda la importancia que tienen, constituyen una evidencia de que el movimiento indígena no supo abrir un espacio de discusión alrededor de la idea de la plurinacionalidad, y que tuvo que transigir su proyecto por el reconocimiento de los Derechos Colectivos (ICCI, 2002).

Con la constitución alineada al neoliberalismo, las élites quisieron avanzar en el programa. El gobierno de Jamil Mahuad de la Democracia Popular intentó, entre otras medidas, subir el precio de combustibles, gas de uso doméstico, congelar salarios y eliminar todos los subsidios sociales. En 1999 se realizaron dos levantamientos; con el primero se instalaron mesas de diálogo que se desgastaron rápidamente, pero el segundo obligó al gobierno a retroceder en el programa, congelar el precio de los combustibles y el gas, y la promesa de desarrollar políticas sociales. La confrontación volvió a estallar en 2000 cuando el gobierno impulsó la dolarización y el salvataje bancario que llevó al país a una profunda crisis social y el empobrecimiento. En aquel momento, el movimiento indígena ocupó las calles nuevamente, pero su demanda fue la disolución de los tres poderes del

Estado y la conformación de un nuevo gobierno. La movilización fue intensa, apoyados por militares de mandos medios llegaron a expulsar al presidente, se tomaron el congreso y formaron un efímero triunvirato en el que estaba Antonio Vargas presidente de la CONAIE, el general Carlos Mendoza y el presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Solórzano.

La toma del “poder” duró apenas seis horas y fue desarmada por la acción de los altos mandos militares. Sin embargo, la presencia de los indios y los mandos medios en la toma, simbólicamente constituía un acto político que trastoca el imaginario del ejercicio del poder (a diferencia de otras regiones, los militares poseen un enorme capital político y aceptación de la población). El hecho no solo reponía las viejas tesis de la toma del poder por asalto, sino que el asalto lo realizaba un indígena. Así, el movimiento, con tensiones al interior de la organización y con otros movimientos, se había convertido en el centro de representación política de las organizaciones populares, en el interlocutor político frente a los gobiernos y se situaba como posibilidad política “por asalto”.

En 2001, Gustavo Noboa buscó avanzar con el salvataje bancario, el incremento del combustible y los pasajes, pero en 2002 los indígenas volvieron a las calles con el objetivo de parar al

gobierno y evitar un tratado libre comercio con los Estados Unidos. Hacia 2003, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, los militares de mandos organizados en el partido Sociedad Patriótica y el Movimiento Popular de Democrático de izquierda marxista leninista, lograron una alianza política electoral, empujan la candidatura de Lucio Gutiérrez (militar que participó en la toma de congreso) y ganan las elecciones. Así, aquella imagen de “asalto” se traducía en una conquista electoral que hasta hace poco parecía imposible.

Varios de los dirigentes de la CONAIE asumieron cargos en el ejecutivo –Nina Pacari en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Luis Macas en el Ministerio de Agricultura–; pero la alianza política duró poco. Gutiérrez giró el rumbo del gobierno hacia las élites de la costa, los partidos políticos de la derecha, el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. A fines de 2003, el conjunto de movimientos sociales que también participaron de la campaña declaró traidor a Gutiérrez y pasaron a la oposición abierta. Hacia 2005, la oposición se transformó en una movilización concentrada en Quito, compuesta principalmente de clases medias que terminó en su expulsión.

Revolución del arcoíris

El relato anterior busca describir el vertiginoso desarrollo político del movimiento indígena que, en una década abrió un escenario completamente novedoso, pasa de la lucha por la tierra y la defensa de territorio, a convertirse en el eje de articulaciones sociales, centro de la representación popular y, finalmente, una opción política electoral. A pesar de que la alianza con Lucio Gutiérrez profundizó los conflictos internos del movimiento indígena campesino, el efecto sobre la sociedad fue enorme.

Primero, aunque las condiciones de marginación y empobrecimiento de la sociedad se asentaron con mayor dureza en las zonas indígenas, resultado del racismo estructural, tal como lo observa Luis Macas (2000), la posición general del mundo indígena respecto a la sociedad cambió:

El Movimiento Indígena ecuatoriano, en ese sentido, ha alterado las raíces mismas de esa estructura de poder y ha hecho que en el Ecuador este momento, no en todas las direcciones ni totalmente, se den cambios profundos, quizá uno de los cambios más importantes sea el reconocimiento a una identidad histórica, el reconocimiento de la

existencia misma de los pueblos indígenas. El reconocimiento del carácter plurinacional de nuestra sociedad y del Estado. En efecto, uno de los aportes del Movimiento Indígena y que ha cambiado el discurso político en el Ecuador es, definitivamente, la propuesta de constituir un Estado Plurinacional, de considerar la diversidad étnico-nacional del Ecuador como un reconocimiento previo para construir la democracia. Es decir, que nos reconozcamos cómo somos, qué somos, y que de alguna manera haya un cierto avance en superar los prejuicios existentes, ése es el aporte del Movimiento Indígena.

Las fronteras étnicas y el racismo que marcaron las relaciones interétnicas se debilitaron, ampliando así las oportunidades sociales y políticas de los indígenas. En términos político culturales, la revalorización de la etnicidad, como elemento positivo de reconocimiento y afirmación identitaria, abrió trayectorias de politización nuevas; en el entorno territorial, las organizaciones sociales de izquierda debieron reconocer la etnicidad como una demanda importante para la acción política y la organización popular; mientras la condición mestiza se había convertido en una estrategia de escape y progreso social, la etnicidad se convirtió en un capital político indispensable para la disputa y ascenso

político.² La etnicidad se convirtió también en la posibilidad de ampliar y fortalecer la organización en el campo. Finalmente, entre la ley de nacionalidades indígenas de 1989 y la constitución de 2008, se amplió el reconocimiento del número de pueblos y nacionalidades indígenas.

Segundo, paralelamente a la disputa política en las calles, el movimiento indígena abrió dos estrategias de participación institucional. Desde 1996 avanzaron en la disputa de los poderes locales (tenientes políticos, juntas parroquiales, municipios, gobiernos provinciales), convirtiéndose en la primera fuerza electoral de la Sierra centro sur y parte de la Amazonía, ahí donde hay mayor proporción de población indígena. Los gobiernos locales se convirtieron en un espacio de experimentación política y social, en donde la democracia y los presupuestos participativos, la rendición de cuentas, la rotación de cargos, la ampliación de servicios con un enfoque más humano, fueron parte de un intento de llevar las “prácticas indígenas” a lo público, pero con efectos concretos

2 Sobre el tema, el trabajo de Ospina y Guerrero (2003) realiza varias entrevistas a dirigentes del movimiento indígena y muestra cómo algunos dirigentes recuperaron su identidad indígena en medio de la movilización o como la movilización política les permitió asentar su identidad indígena.

sobre el bienestar de la población y una mayor inversión en las zonas rurales (Ospina et. al., 2006). Probablemente la experiencia de Cotacachi, que ganó el “Premio Dubái a las mejores prácticas de gobernabilidad y participación ciudadana” y el premio internacional “UNESCO Ciudades por la Paz”, sea la más conocida, pero a esta experiencia hay que sumar los avances de las provincias de Tungurahua, Zamora Chinchipe, Cotopaxi; y los municipios de Cañar, Nabón, Guamote, Saquisilí, Otavalo, Cayambe o Saraguro.

Tercero, a lo largo de la década, las organizaciones y los distintos gobiernos negociaron las demandas; parte de esa negociación se tradujo en una serie de instituciones que, si bien tuvieron la intención de desmovilizar a las organizaciones, también recogían propuestas y anhelos de estas para la aplicación e implementación de derechos. Así se crearon:

- 1988, Dirección de Educación Intercultural Bilingüe.
- 1992, en el Congreso Nacional, la Comisión de Asuntos Indígenas.
- 1994, Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas dependiente de la Presidencia.
- 1996, Ministerio de Asuntos Étnicos.

- 1997, Consejo de Planificación de los Pueblos Indígenas y Negros (CONPLADEIN).
- 1997, Unidad Ejecutora del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE), inserta en el CONPLADEIN.
- 1998, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador (CODENPE).
- 1998, Corporación de Desarrollo del Pueblo Afroecuatoriano (CODAE).
- 1998, Ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Las Nacionalidades y los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
- 1999, Dirección Nacional de Salud de las Nacionalidades y los Pueblos Indígenas.
- 2000, Fondo de Desarrollo Indígena del Ecuador (FODEPI).

El balance de los efectos de estas instituciones es controversial; trabajos como el de Bretón (2006) muestra que las acciones del PRODEPINE estaban enfocadas a desmovilizar a las zonas de mayor presión política. Korovkin (2008) observa que la propuesta de reparto de tierras vía mercado tuvo un efecto desmovilizador. North y Decameron (2008) observan que las acciones para el desarrollo no tenían oportunidades frente a la reforma neoliberal

en las que se enfocan los gobiernos. Sin embargo, los trabajos de Barrera (2001) y Ospina et al. (2009) resaltan cómo, a pesar de los recursos limitados, las disputas y los enredos burocráticos, las instituciones se convierten en un espacio de influencia social y político con mecanismos para canalizar recursos a las comunidades empobrecidas, “conquistas” indispensables para mantener la organización y la movilización.

Los efectos de tales acciones son complejos, muchos de ellos no fueron los que esperaban las organizaciones, pero solo el sistema de educación bilingüe entre 1989 y 1998 pasó de 951 planteles a 1.833, por los cuales pasaron de 41.695 a 92.101 alumnos por año, y de 2.694 profesores a 5.630 (Coba, 1998, en Ospina y Guerrero, 2003, p. 206).

Finalmente, el avance político del movimiento abrió un debate que está relacionado con el Estado, la democracia y el sistema político. A finales del siglo era evidente el conflicto del sistema político, las élites carecían de capacidad para mantener sus consensos y los movimientos sociales empujaron la crisis logrando dibujar los límites del modelo para recoger las expectativas de la sociedad. En ese terreno emergió una discusión interesante sobre las múltiples posibilidades que abrían las propuestas del movimiento indígena para la sociedad: una ciudadanía diferenciada, democracia plural, una

sociedad intercultural constituían tesis teórico políticas que daban cuenta del peso del movimiento sobre los estudios, en especial desde los años dos mil (Herrera Revelo, 2020).

Las sombras del arcoíris

Hacia finales de la década de los noventa, los mismos indígenas con Luis Macas a la cabeza abrieron un debate para hacer un balance sobre los avances y límites del movimiento indígena (ICCI, 2000, 2001):

Del levantamiento de julio de 1990, a la insurrección popular del 21 de enero de 2000, existe un profundo y complejo proceso político por el cual los indígenas ecuatorianos se van convirtiendo en el eje a partir del cual se articulan fuerzas sociales en contraposición al proyecto político y económico dominante. Este eje de acción política, en cuyo centro se ha ido situando la CONAIE, se ha convertido, a no dudarlo, en uno de los contrapoderes más efectivos que existen al interior del Ecuador. De ahí que a fines de la década de los 90's, el Ecuador presente un cuadro de bloqueos

políticos y de impasses que han hecho virtualmente imposible que se concreten los aspectos más elementales de la propuesta del Consenso de Washington: la liberalización y la privatización total de la economía. Hasta ahora, aspectos claves de la economía, como son los sectores energéticos, la seguridad social, la tierra, el agua, los recursos medioambientales, la salud y la educación, aún no han sido transferidos al sector privado. El Ecuador, en ese sentido, es casi el único país en la región que no se ha “modernizado”, si se otorga al término la conceptualización dada por el Consenso de Washington (ICCI, 2000).

Tal como lo observa la editorial, luego de una década de movilizaciones y un gran éxito del movimiento indígena, el esfuerzo no había sido suficiente para quebrar la agenda neoliberal, aunque, en comparación a la región o los experimentos como Chile, en el Ecuador, el neoliberalismo y los intereses de las élites tuvieron algún límite. Al interior del movimiento se discutía el carácter de su “crisis”. El problema central fueron las crecientes tensiones, por un lado, al interior del movimiento y, por otro, con el resto de actores que compusieron su alianza política frente al neoliberalismo. Ya en el gobierno de Abdalá Bucaram, el Ministerio de Asuntos Étnicos se había convertido en un eje de

tensiones entre los grupos que apoyaron su candidatura y los que criticaron su agenda neoliberal. Pero el efecto fue mayor, era el primer momento en que se observaba que al interior del mismo movimiento existían distintas tendencias políticas, que jugaban por posiciones personalistas y demandas locales-particulares, y que había una fragilidad ideológica.

Uno de los problemas al interior del movimiento quizá sea que hay intencionalidades individuales a su interior, lo cual estaría representado en un “indigenismo puro” que no logra entender que “solos no lograremos nada”; una “distancia entre la dirigencia y la base” que limita la conducción; y saber que en “La práctica - y en eso se ha basado el éxito del movimiento indígena- es la de los consensos, incluso para los levantamientos, si no hay consensos no hay nada” (Macas, 2000b, p. 5).

Mahud intentó llevar las negociaciones a los territorios con una política de dádivas que no tuvo mayores efectos; sin embargo, en el proceso de negociaciones que se dieron resultado de las movilizaciones, el movimiento indígena fue “solo” y las organizaciones de la Coordinadora de Movimientos Sociales y algunos dirigentes del movimiento lo observaron críticamente:

Una prueba de esta situación está en el proceso seguido en el diálogo con el Gobierno. Durante el levantamiento se logra un acuerdo entre las organizaciones indígenas y los movimientos sociales sobre un Mandato Unitario que centra su atención en los ejes de poder: ir desde el rechazo al alza del gas y los pasajes a un cuestionamiento al modelo neoliberal, enfrentando las privatizaciones del patrimonio nacional (seguridad social, petróleo, electricidad), el salvataje bancario, la reforma tributaria y el Plan Colombia. Y dentro de esta perspectiva global, abordar los temas específicos de cada sector: conflictos de aguas, fondos indígenas y para la producción, demandas provinciales. (...) Pero este mandato es archivado. *La representatividad no está en el tema formal de la exclusión de representantes de la CMS en la mesa de negociaciones; sino en la exclusión de los temas fundamentales que congregan a los demás sectores* y, por tanto, en la reducción a temas indígenas (indemnizaciones, fondo indígena, banco de fomento, conflictos de aguas), mientras los demás ejes quedan como complementarios y discursivos y como materia de acuerdos formales (comisiones de estudio, cronogramas de reunión). *Con ello, el movimiento indígena empieza a debilitar su relación con la sociedad civil*, que ha sido una de las fuentes de su fuerza en su período (Saltos, 2001).

La alianza con Lucio Gutiérrez fue un momento de fragmentación interna, el movimiento indígena se mostró permeable a los intereses del gobierno y, en la ruptura, varios dirigentes eligieron mantener sus cargos. Según Saltos Galarza (2001), el gobierno de Gutiérrez aprovechó la ruptura con sus aliados para fortalecer su relación con otros interlocutores del mundo indígena, usó las tensiones de la CONAIE con la FEINE y la FENOCIN para abrir un nuevo eje de negociaciones para legitimarse frente a los sectores populares en el campo.

El punto álgido de la crisis se hizo evidente tras la caída de Lucio Gutiérrez. Luego de un corto proceso de desgaste del gobierno, las movilizaciones ocuparon las calles y se concentró fundamentalmente en Quito; su composición fue fundamentalmente de clases medias, aunque no exclusivamente. En ese momento, la participación del movimiento indígena fue menor: no lograron articular una respuesta clara ya que la complejidad del momento y las dificultades para salir a las calles fue leída como un compromiso con el gobierno caído en desgracia.

Finalmente, interesa resaltar el momento contradictorio. En el período 1990-2006, el movimiento indígena, en medio de la enorme diversidad sociocultural, logró cohesionar su estructura nacional (una organización que se presenta como

gobierno indígena, tres organizaciones regionales Costa-Sierra-Oriente, una organización de segundo grado en cada provincia de la Sierra y Amazonía, varias organizaciones cantonales y miles de comunidades indígenas como estructuras de base); su fuerza de movilización se convirtió en el centro de agregación política para el resto de movimientos, lo cual le permitió cosechar varios éxitos y ser el polo de acción con capacidad de veto sobre la agenda neoliberal; extendió su influencia territorial e institucional; pero sobre todo, logró el amplio reconocimiento por parte de la sociedad. Sin embargo, hacia el año 2000 también daba signos del agotamiento. Ospina Peralta (2009) y Ramírez Gallegos (2009), en dos visiones distintas, observan que la *estructura organizativa* y los *acuerdos políticos* del movimiento resultaban insuficientes para gestionar su vida política interna, el contexto y entorno político organizativo, las demandas crecientes de sus bases, la relación con el estado (gobiernos locales, instituciones en sus manos), la relación con los distintos actores y la disputa con sus competidores.

Cambios progresistas para la movilización

La caída del gobierno de Gutiérrez mostró la incapacidad de las élites para encontrar una salida política al conflicto. El mejor ejemplo del ánimo social del momento fue la demanda de los Forajidos de “que se vayan todos”. En medio del gobierno de transición, Rafael Correa asumió el cargo de ministro de economía. Sus discursos de oposición al neoliberalismo le dieron visibilidad y despertó la simpatía de las organizaciones sociales. Sin experiencia, ni militancia previa, Correa logró una alianza política con varios sectores de izquierda que ayudaron a impulsar su candidatura. El discurso claro, humor mordaz y la campaña corrosiva del orden lograron captar el interés de la sociedad. En un momento, Alianza PAÍS propuso que la vicepresidencia fuera ocupada por un representante del Pachakutik, pero este optó por ir con un candidato propio, a pesar de que varias de sus bases y organizaciones plantearon una alianza.

La frustrada experiencia previa y la dispersión electoral obligaban a cerrar las posiciones.

En la primera vuelta electoral, las organizaciones de izquierda y los movimientos sociales no participaron de la iniciativa o corrieron solos en las elecciones, pero en la segunda vuelta, ante la posibilidad de que Álvaro Noboa –la fortuna más importante del país– ganará las elecciones, gran parte de los movimientos salieron a las calles a disputar el voto por Alianza PAÍS. Luego, se sumaron a la propuesta y en los distintos territorios intentaron ocupar y darles forma a sus expectativas al interior de esa alianza.

Nuevo consenso

Alianza PAÍS y el gobierno de la Revolución Ciudadana recogieron la subjetividad del momento, con un discurso antioligárquico, antiimperialista y antineoliberal; retomaron las históricas demandas de las organizaciones como las críticas al salvataje bancario, la oposición al Plan Colombia y la instalación de la Base de Manta, el deseo de una nueva constituyente, las demandas de inversión social, las luchas contra la tercerización laboral, entre otras.

Sin bancada en el congreso, el gobierno, con el apoyo del Pachakutik, el Partido Sociedad Patriótica, Movimiento Popular Democrático y el Partido Socialista, logró impulsar una consulta popular por una nueva constituyente (2008) y, con esta, ampliar su articulación social y política. Durante la constituyente (2007-2008) las organizaciones y movimientos sociales intentaron repetir las asambleas populares de 1998 para presionar a los constituyentes, pero cada uno llegó por su lado. A diferencia de 1998, la nueva constituyente estaba ocupada con una mayoría de Alianza PAÍS (ochenta de ciento veinte escaños) y los movimientos sociales tenían vínculos con varios de los constituyentes a través de los cuales canalizaron sus propuestas. La constituyente reforzó y amplió el marco de derechos; entre sus primeras acciones, el Mandato Constituyente N° 8, contra la tercerización laboral, y el Mandato Constituyente N° 14, para la reversión de las concesiones mineras, reforzaron la sintonía constituyente.

Todas las organizaciones y movimientos sociales, incluso los trabajadores que criticaron la nueva constitución porque limitaba la huelga en los sectores públicos, participaron de su promoción y aprobación en el referéndum que logró el 64% de aval. El debate institucionalizó el Estado Plurinacional, el Sumak Kausay, las lenguas indígenas para el

uso oficial, los derechos de la naturaleza, derechos colectivos y la consulta previa e informada, la prelación del agua, la proscripción de latifundio o la soberanía alimentaria. Hubo muchas razones para que las organizaciones indígenas y campesinas defendieran la nueva constitución y lucharan por la reforma posconstitucional.

En las elecciones siguientes, resultado de la nueva constitución, Rafael Correa ganó con el 51% de los votos y Alianza PAÍS logró la mayoría de la flamante Asamblea Nacional. En ese momento se impuso una correlación de fuerzas inédita en la historia: el gobierno en poco más de dos años, no solo contaba con una enorme popularidad, sino que, además, tenía la mayoría política en la Asamblea Nacional Constitucional, el control del ejecutivo y la nueva constitución como un régimen normativo por construirse. Además, con la renegociación de contratos petroleros incrementó la participación estatal en las ganancias y dispuso de los recursos económicos necesarios para incrementar la inversión pública. Del otro lado de la orilla, las élites políticas y económicas desprestigiadas contaban con pocos márgenes de acción política.

El nuevo gobierno construyó un momento excepcional y la disponibilidad de recursos le permitió avanzar con un proceso de reinstitucionalización e inversiones sociales, solo comparables con

el período de industrialización de los años setenta. Aunque se puede criticar el modelo de inversiones sociales, pues no se propuso desmontar la lógica disciplinar de las instituciones, las inversiones fueron un hecho, sobre todo, la expansión del sistema vial, salud y educación. Además, la Revolución Ciudadana amplió el sistema de asistencia social para los sectores informales y las trabajadoras del hogar, mantuvo un ritmo de crecimiento constante del salario mínimo salarial, amplió la base tributaria y reformó el sistema impositivo, al punto que en 2014 llegó a ser el segundo ingreso estatal. La reforma institucional y la ampliación del Estado provocaron la mejora de los salarios y condiciones laborales de la burocracia (la cual incluye a los profesores y médicos de los sistemas públicos); así, el Estado se convirtió en una posibilidad de ascenso social y modificó la estructura de clases (Ruíz Acosta, 2015).

El gobierno se convirtió en el motor de la economía y la matriz de la planificación nacional, definió los horizontes del desarrollo y del crecimiento, reformó las instituciones y creó nuevas (desde los ministerios de coordinación, a las nuevas universidades, pasando por consejos sectoriales y de gobierno). Con la constitución y el Plan Nacional de Desarrollo –una herramienta de planificación vinculante para las instituciones y gobiernos autónomos (parroquias, municipios y concejos

provinciales)– sintonizó las inversiones nacionales y locales con los objetivos de desarrollo. Sus promesas se combinaron con grandes relatos de transformación: el Cambio de la Matriz Productiva y el Cambio de la Matriz Energética que, en lo formal, llegaron a redefinir la especialización productiva de los territorios, pero sin mayores efectos reales. El gobierno se convirtió en el gran actor de un nuevo proceso de modernización y ciudadanización, en el cual, sus visiones “universalistas” se opusieron a las demandas de reconocimiento de “diversidad” por parte de las organizaciones y, en esa disputa, encontró que las instituciones indígenas eran reflejo “corporativista” y no parte de los derechos conquistados, así decidió eliminarlas o subordinarlas al programa estatal.¹

La dinámica de inversiones y las grandes promesas de cambio lograron una enorme popularidad y fidelidad de la población con el gobierno; valga decir que Rafael Correa participó en tres

1 El 24 de enero 2009, poco después de las movilizaciones antimineras, el presidente en una sabatina decidió eliminar el Concejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE). Su discurso enfiló contra Lourdes Tiban, que había sido presidenta del CODENPE, y se llenó de varios agravios contra los dirigentes. El acto fue leído por el movimiento como un acto de racismo y autoritarismo. Sin embargo, esa declaración marcó el futuro del resto de las instituciones.

elecciones presidenciales (2006, 2009, 2013), en dos de ellas obtuvo mayorías con las que no fue necesaria la segunda vuelta, y Lenin Moreno llegó a la presidencia como parte de Alianza PAÍS (2017); además ganaron varias consultas populares (2007, para avanzar en la constituyente; 2008, para aprobar la nueva constitución; 2011, que tenía como eje central la reforma al sistema de justicia).

Sin embargo, su éxito se acompañó de una creciente conflictividad. Según Sánchez Perugachi (2013), esa conflictividad, incluso fue más alta que en el período neoliberal y creció en medio de la expansión de las inversiones estatales, la reducción de los indicadores de pobreza y el crecimiento de la clase media; además, mientras que con el movimiento indígena su posición fue inflexible, con las élites negociaba los conflictos.

Movilización y descomposición

Desde 2009, varios movimientos sociales empezaron a distanciarse del gobierno y entrar en la oposición, especialmente los trabajadores, los indígenas, los ecologistas y las mujeres. Podríamos decir que el primer acto fue la sustitución de Alberto Acosta

que, no solo había sido presidente de la Asamblea Constitucional, sino que era una figura de confianza de los movimientos sociales, en especial los ecologistas. El hecho en sí mismo marcaba una nueva dinámica en la relación entre el gobierno y las organizaciones sociales. Si la constituyente, nueva constitución y elecciones posconstituyente lograron una alianza con las organizaciones y movimientos de izquierda, la salida de Alberto Acosta marcó el desarrollo de la creciente polarización con el gobierno y la fragmentación política al interior de los sectores populares.

Año	Levantamientos, movilizaciones y acciones políticas relacionados con el movimiento indígena (2007-2016)
2007	En febrero gran marcha a Quito con más de 5 mil participantes de diversas delegaciones de Azuay, Morona Santiago, Chimborazo, Pichincha e Imbabura. Toma simbólica de la Dirección Regional de Minería.
2008	Nueva constitución y referéndum aprobatorio.
2009	Movilizaciones contra la Ley de Minería.
2009	Elección presidencial posconstitución, Correa gana nuevamente las elecciones con el 52%.
2010	CONAIE se moviliza por la Ley de Agua y la desprivatización del riego, frente a la consulta prelegislativa impuesta por la Asamblea Nacional.
2011	Movilizaciones de CONAIE, FEINE, FENOCIN, FEI y Seguro Social Campesino por la Ley de Agua y la Ley de Tierras.

Año	Levantamientos, movilizaciones y acciones políticas relacionados con el movimiento indígena (2007-2016)
2012	<p>Marcha por la Vida y por el Agua del Pangui a Quito que movilizó a más de 70.000 personas.</p> <p>FENOCIN, CNC y FEI entregan más de 40.000 firmas en la Asamblea Nacional para promover la Ley de Tierras vía iniciativa popular.</p>
2013	<p>1600 organizaciones comunales debaten y disputan Ley de aguas con la demanda central por la desprivatización de la misma.</p> <p>Marchas indígenas campesinas contra la minería, el cierre de escuelas bilingües y la protección del Yasuní.</p>
2013	Rafael Correa gana las elecciones con el 57% de votos.
2014	El movimiento indígena inicia acciones contra las intenciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social que, en dirección de Betty Tola, ex militante del Pachakutik en Cuenca, plantea retirar el comodato de la sede de la CONAIE dado en 1991.
2014	Yasunidos entregan 755.000 en busca de la aprobación de una consulta popular para la protección de la Reserva YASUNI.
2015	<p>Sectores conservadores se movilizan masivamente contra enmiendas que permiten reelección del presidente y la Ley de Plusvalía.</p> <p>Marcha anti-minera y movilizaciones locales oponiéndose a las reformas constitucionales.</p>
2016	<p>Antes de acabar su presidencia, Correa firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea.</p> <p>FEINE propone su apoyo a la candidatura de Guillermo Lasso.</p>

Las primeras en movilizarse fueron las organizaciones indígenas campesinas enfrentadas a la minería que, si bien el Mandato Minero y la confianza en Alberto Acosta lograban mediar el conflicto y reducir las tensiones, pasada la constitución

volvieron a las calles contra la propuesta del gobierno de impulsar la Ley Minera y “racionalizar la explotación”. La posición del presidente marcó el *sentido* de la disputa, la defensa de territorios contra las promesas de desarrollo avaladas por la nueva constitución.

La posición de no a la minería no tiene sentido, qué país en el mundo se opone a la minería. Otra cosa es oponerse a ciertos proyectos mineros, yo seré el primero en oponerme a proyectos mineros que tengan un impacto ambiental muy grave. Por ejemplo, hay proyectos mineros de cobre en la Cordillera del Cóndor, un sitio de alta biodiversidad, además un territorio Shuar. Compañeros Shuar un gran abrazo, ustedes son los dueños del territorio, pero la constitución nos dice que, del subsuelo el Estado ecuatoriano es el dueño, de los recursos no renovables el Estado ecuatoriano es el dueño, no nos confundamos, no se dejen engañar por dirigentes irresponsables. La constitución que ustedes mismos ayudaron a construir, establece claramente que son del estado Ecuatoriano, de todos y todas las ecuatorianas (...) Compañeros, ningún grupo puede decidir sobre estos recursos, eso es inconstitucional, así que compañeros Shuar, CONAIE, comunidades indígenas, no se dejen engañar por dirigentes irresponsables. Eso no quiere decir que les vamos a imponer las cosas,

siempre vamos a consultar y vamos a decidir juntos, pero proyecto por proyecto. Pero esas posiciones de ¡no a la minería! No a la exploración, es decirle no a saber ¡qué es lo que tenemos?! Es un completo absurdo, no resiste ningún análisis serio. No se me dejen engañar por dirigentes irresponsables. ¡Sí! a la exploración, y luego, con ustedes, decidiremos si vale la pena un proyecto o no (Correa, 2009).

Hasta mediados de 2000, la minería no era una parte central de la agenda del movimiento indígena. La columna vertebral del movimiento fue la ECUARUNARI, nacida en la lucha por la tierra, y la CONFENIAE, nacida en la defensa de los territorios; la lucha contra la minería emergió de Intag en la zona norte, Quimsacocha / Molleturo en la zona sur y Tundayme / Pagui en Zamora. Conflictos que, si bien registran confrontaciones con las empresas desde principios de los años noventa, se disputaban en los reductos locales. A mediados de la década de dos mil se articularon, en torno a Asamblea Nacional Ambiental, el Frente de Resistencia Sur a la Gran minería en Ecuador (FRESMIGE), la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS) y la Asamblea de los Pueblos del Sur, que sostendrán la movilización social, la cual finalmente dio vitalidad a dirigentes como Carlos Pérez –hoy Yaku Pérez– y Salvador Quispe,

articulados a la CONAIE, los cuales se convirtieron en las figuras públicas del conflicto. En este sentido, primero la Asamblea Nacional Constituyente y luego el movimiento indígena se convirtieron en importantes recursos para escalar el conflicto.

En el 2009, frente a la Ley de Agua presentada por el gobierno, las organizaciones indígenas y campesinas se movilizaron demandando que se cumplan los avances constitucionales: la *desprivatización* del agua, el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua y una institucionalidad con participación de los pueblos y regantes. A pesar de cierto acuerdo entre las organizaciones en torno a la ley, mientras las organizaciones de regantes y las comunas indígenas se movilizaban, el gobierno avanzó en un acuerdo con la FENOCIN, FEINE, FEI y la CONFEUNASSC. Sin embargo, la movilización creció y, en medio de la represión, murió Bosco Visum, un profesor shuar. Su muerte impactó la opinión pública y, solo entonces, el gobierno aceptó el diálogo. A pesar de las expectativas, fue la única y última vez.

El presidente inició con el planteo de dos temas centrales para el diálogo: tomar la Constitución como documento marco y una comisión para averiguar sobre la muerte de Bosco Visum, y culminó con el Decreto Ejecutivo N° 96 oficializando el diálogo entre el presidente y los dirigentes. La relación directa entre la CONAIE y el presidente generó

inquietudes en el bloque de aliados del gobierno, pero de la conversación y acuerdos dejó muy poco en la memoria, solo quedó una imagen:

Los dirigentes indígenas se quejan y le plantean al gobierno que no pueden ser tratados como minorías, que son mucho más que el 2% de la población. Rafael Correa reaccionó preguntando ¿Quién fue el imbécil que dice eso? Y Marlon Santi, presidente de la CONAIE en aquel momento responde, ¡Usted señor presidente!... (Ecuador TV, 2009).

Durante los siguientes años, las organizaciones indígenas campesinas (FEINE, FENOCIN, CONFEUNASSC, FEI) afines al gobierno y el movimiento indígena (CONAIE) en clara oposición, lograron cierto acuerdo para impulsar la movilización como herramienta para presionar el debate en torno a la Ley de Tierras y la Ley de Agua, pero no tuvo la fuerza esperada y la Asamblea Nacional en manos de Alianza PAÍS resultó impermeable. El punto más álgido fue en 2012, cuando las organizaciones indígenas campesinas afectadas por la minería realizaron una nueva marcha desde El Pangui a Quito: “Marcha por La Vida y por Agua”, una movilización de 70 mil personas que debió soportar una enorme estrategia de deslegitimación y propaganda por parte del gobierno (Ortiz Crespo, 2016).

En 2012, la posición del presidente al respecto mostró el deterioro de la relación y la imposibilidad del diálogo. Mientras las demandas se concentraban en un largo pliego de peticiones (diecisiete demandas) que empezaba por la *defensa y afirmación de la constitución*, y las promesas de la misma Revolución Ciudadana (la protección de las economías populares, la democratización de la información, derecho al libre ingreso, derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos, la oposición a los tratados de libre comercio, el fortalecimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), tenía como elementos distintivos, afirmar su oposición al modelo extractivo, la demanda por respeto de su autonomía y denunciar la criminalización de dirigentes.

MANDATO DE LA MARCHA PLURINACIONAL (CONAIE, 2012)

Exigimos la plena vigencia de la Constitución y de la derogatoria de normas y leyes inconstitucionales.

No a la minería a gran escala. Derogatoria de la ley minera por ser inconstitucional y de la firma del contrato minero con Ecuacorrientes S.A. Proyecto Mirador del 5 de marzo.

No a la extensión de la frontera petrolera. Respeto a la autodeterminación de los pueblos. Suspensión de las operaciones del bloque 31.

No a los megaproyectos eléctricos que generan enormes impactos sociales y ambientales.

Aprobación de la Ley del Agua para el buen vivir que contemple el respeto y garantía del derecho al agua.

Aprobación de la Ley de Tierras y Territorios que contemple un modelo agrario que garantice la seguridad alimentaria.

Reconocimiento del transporte comunitario, reforma a la ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.

No a la criminalización de la protesta social, eliminación de los juicios a los dirigentes.

Cumplimiento del derecho a la consulta previa en las comunas y comunidades del Ecuador.

Respeto a las funciones jurisdiccionales de la administración de la justicia indígena y respeto a los gobiernos comunitarios.

Respeto a la autonomía de los pueblos y nacionalidades.

No a la agresión verbal de los pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales.

El gobierno respondió con un discurso que polarizó a la sociedad y convirtió a las organizaciones

en extremistas desestabilizadoras y enemigas de la revolución.

Dicen que llegarán a tomarse Quito el 22 de marzo (...) ¡Estará tomada por la Revolución Ciudadana, por decenas de miles de ecuatorianos, que dicen: ¡Esta revolución no la detiene nada ni nadie!” *“De forma pacífica, democrática, demostraremos que somos millones más y que no permitiremos que los mismos de siempre, la extrema izquierda, la extrema derecha y la prensa corrupta, desestabilicen este proceso histórico de cambio”*. “Si ellos quieren marchar a Quito, aquí nos encontrarán (...) “Es un fracaso clamoroso la marcha y la desestabilización de los opositores. Son poquitos, pero su poder es inversamente proporcional a su tamaño. Son poquitos, pero tienen medios de comunicación” (Correa, 2012, *El Comercio*, 10 marzo 2012).

En el 2012, el gobierno ya contaba con una importante estrategia de comunicación y una red oficial de medios. El 1º de mayo el gobierno movilizó a sus bases en una vigilia en la capital cual “contramarcha”, pero los movimientos sociales de la “oposición” ganaron las calles, política y simbólicamente. En Quito, el encuentro fue masivo, se sumaron las organizaciones del Frente Popular, ecologistas, mujeres y barrios, ríos de gente volvieron a ocupar

El Arbolito –parque tradicional de las luchas de los movimientos sociales– y levantaron la Asamblea de los Pueblos para debatir el futuro de las acciones. En una sociedad caracterizada por la movilización social como instrumento para empujar la aplicación y ampliación de derechos, el tamaño de la marcha generó muchas expectativas, se pensó en la recuperación del campo organizado, sobre todo, una alianza entre los trabajadores y los movimientos indígenas campesinos; en el peor de los casos, una mejor posición para la negociación, pero no ocurrió. En mayo del 2013, el gobierno firmó el contrato para la explotación minera a cielo abierto “MIRADOR” y los siguientes años el proyecto Quimsacocha, en Azuay, y Llurimagua, en Intag.

En el 2013, con el 57% de los votos, Rafael Correa ganó nuevamente las elecciones en primera vuelta y Alberto Acosta, el candidato de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas y los movimientos sociales, recogió solo el 3,2% de los votos, ocupando un sexto lugar luego de 4 candidatos que representaban a fracciones de la derecha. El resultado legitimó la minería, la extracción petrolera, la negativa al aborto y las críticas al movimiento indígena o la izquierda “infantil”, como la llamaba el presidente. Los movimientos sociales no tuvieron fuerza electoral y fue evidente que aquella alianza social que sostuvo la disputa frente al neoliberalismo se

había fragmentado, las organizaciones estaban atrapadas en una posición entre el “oficialismo y la oposición”, entre el correísmo y el anticorreísmo.

Distribución de las organizaciones en la polarización Oficialismo vs Oposición		
Sectores	Oposición	Oficialismo
Indígenas campesinos	CONAIE. Asamblea de Organizaciones, Pueblos y Nacionalidades de la Costa (Centro Agrícola de Quevedo, Tierra y Vida, Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, C CONDEM).	Alianza Indígena (constituida en parte por algunas fracturas de dirigentes de la misma CONAIE). CLOC-Vía Campesina (Coordinadora Nacional Campesina, FENOCIN, FEI, FENACLE).
	Federación del Seguro Social Campesino (FEUNASSC).	Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE).
	Movimiento Agroecológico.	Confederación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFUNASSC).
	Asamblea de los Pueblos del Sur.	Alianza Tsáchila.
	Organizaciones Ecologistas.	
Trabajadores	Frente Unitario de Trabajadores (FUT).	Central Única de Trabajadores (CUT).
	Asociación de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (ASTAC).	Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE).
	CEDOCUT.	Parlamento Laboral.
	Unión Nacional de Educadores (UNE).	Red de Maestros.
	Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador (FETRAPEC).	

Al mismo tiempo, las organizaciones trabajaron en la disputa normativa, participaron de las consultas prelegislativas,² buscaron su participación en el debate e intentaron impulsar cambios por la democratización de los recursos, pero eso tampoco ocurrió:

En 2014 se promulgó la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, la cual resulta ambigua en la participación comunitaria, no logró la redistribución y no limitó la privatización, demandas presentes en la misma constitución (Art.3).

En 2016 se aprobó la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que marcó el fin del debate y reparto de tierras, las elites lograron que el latifundio se defina por improductividad y no por la gran propiedad, con lo cual los mecanismos de afectación resultaron poco aplicables.

En 2017, la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, en

2 Para la ley de tierras se presentaron 40.000 firmas y una propuesta que no fue tomada en cuenta. En la Ley de agua, cerca de 1.600 organizaciones, entre comunidades indígenas y organizaciones de regantes, se organizaron y calificaron para participar de la consulta prelegislativa.

contra de los principios constitucionales que reconoce al país libre de transgénico y promueve uso y conservación de semillas ancestrales; la ley se orientó a las semillas certificadas y, por el veto presidencial, dejó abierta la entrada de cultivos transgénicos “con fines investigativos”

El punto más álgido de la “disputa por la reforma” fue la defensa del Yasuní. Las organizaciones ecologistas con el apoyo de la CONAIE y las organizaciones enfrentadas a la minería empujaron una consulta popular para evitar la explotación petrolera en un área protegida de 9 mil kilómetros. En el 2014 presentaron cerca de 750 mil firmas, 150 mil más que el mínimo requisito del 5% del padrón electoral. En respuesta, el gobierno movilizó un grupo YASUNÍ-Libre que presentaron “al presidente” un millón de firmas para promover una consulta a favor de la extracción petrolera y se tomaron El Arbolito un día antes de que los ecologistas presentaron sus firmas al Consejo Nacional Electoral (CNE); sin embargo, el millón de firmas nunca fueron entregadas a la institución, ni se contabilizaron, pero la disputa se zanjó en el CNE que anuló 400 mil firmas. Durante la entrega de las firmas, Yasunidos denunció que el CNE había roto la cadena de custodia y abierto cajas. La acción de Yasunidos no logró cambiar la coyuntura, pero

la “trama de la disputa” mostró que el gobierno estuvo dispuesto a todo para deslegitimar su acción y abrir la explotación petrolera en el YASUNÍ (Sarmiento, 2021).

Las organizaciones siguieron reclamando al gobierno la legalidad de las firmas, pero el hecho constituyó una derrota política para el movimiento. Aunque la CONAIE o el Frente Popular y organizaciones afines participaron, el corazón de la acción estuvo en Yasunidos: el grupo había logrado canalizar la voluntad masiva de jóvenes quienes lograron la recolección de las firmas. Pero la “derrota” frente al gobierno no se tradujo en revés territorial, las organizaciones enfrentadas a minería avanzaron en consultas populares de carácter local (sobre todo en Quimsacocha) que, siendo “ilegales” porque no disponían de los permisos del CNE, superaron el 80% de votaciones en contra de los proyectos mineros.

La popularidad del presidente y la mayoría en la Asamblea Nacional parecían haber sellado el *momento hegemónico*: no solo controlaba el gobierno central y la Asamblea Nacional, sino que contaba con una enorme popularidad y la participación activa de un abanico amplio de organizaciones. Así, el gobierno avanzó en una reforma institucional sin negociaciones. Su discurso frente a las demandas de las organizaciones no cambió y

levantó una estrategia de contención compleja en donde actuaban los ministerios, la Gobernación Provincial, la acción de Alianza PAÍS y la inversión pública (escuelas, vías, proyectos); y frente a los núcleos de oposición la intervención policial militar y la acusación judicial de dirigentes (Herrera Revelo y Latorre Tomas, 2013).

Al cerrar el 2014, las organizaciones, dentro y fuera del gobierno, no tuvieron eco en la propuesta gubernamental, a pesar de tener agendas comunes, sus posiciones a favor o en contra las dividieron y fragmentaron. Para el movimiento indígena fue un golpe fuerte, la alianza que apoyó su ascenso a principios de los noventa y lo habían ayudado a convertirse en una alternativa política, se fragmentó. El movimiento en su sentido más amplio (el movimiento indígena junto a sus aliados) perdió fuerza social e hizo del *asedio político* al gobierno, el centro de la lucha política.³

3 El *asedio político* hace referencia a prácticas de resistencia de las comunidades indígenas frente a la hacienda, una lucha cotidiana, molecular y subterránea que usaron frente al poder terrateniente.

El lugar incómodo

En 2015, a pesar de las derrotas y la infranqueabilidad de la Asamblea Nacional, las organizaciones volvieron a ocupar las calles, pero el contexto era distinto. En 2014, el gobierno perdió las elecciones seccionales y las cabeceras provinciales más importantes del país (Quito, Guayaquil y Cuenca); fue la primera vez que sentían un revés electoral y las élites recuperaban el espacio público. Además, con el desplome del precio del petróleo y el ascenso de la crisis, perdió capacidad de construir consensos vía inversión social. A principios de 2015 el gobierno lanzó dos propuestas complejas; por un lado, una reforma constitucional para permitir la reelección del presidente y, por otro, la Ley de Herencias y Plusvalía que intentaba gravar las herencias y las ganancias extraordinarias resultado de la especulación. Las élites movilizaron sus redes y, junto a los medios de comunicación, lograron articular los sentidos conservadores de las clases medias que se sintieron amenazadas y tomaron las calles.

La participación de los trabajadores e indígenas en las movilizaciones resultaba contradictoria, la agenda de las élites era claramente conservadora y sumar sus banderas en la Shyris era un espacio

“incómodo”. Trabajadores e indígenas se movilizaron: la CONAIE convocó a un “levantamiento” a pesar de las distintas posiciones de las organizaciones indígenas en torno al gobierno y el miedo instalado entre varios dirigentes:

¿Estamos preparados para un levantamiento de esta magnitud? ¿Y si nuevamente nos enjuician?” “Compañeros, sin miedo. Nuestra lucha es justa”, gritaban indígenas desde el fondo del salón. “Para actuar con sabiduría en caso de represalias. Hay compañeros que están enjuiciados y cerca de la cárcel (Dirigente de la CONAIE, citado en *El Comercio*, 2 de agosto 2015).

El FUT convocó a un paro nacional y con el levantamiento en marcha lograron un espacio alternativo que articuló el descontento de otros sectores. Allí, se sumaron los “Yasunidos”, la Federación Médica Ecuatoriana, el Frente Popular, los jubilados, la Asamblea de Barrios y Trabajadores Municipales en Quito, la Coordinadora de Movimientos Sociales de Azuay, campesinos y organizaciones enfrentadas a la minería. El acuerdo de las organizaciones indígenas fue iniciar una marcha el 3 de agosto desde Tundaime-Pangui, en Zamora, a 500 km de Quito, la cual, llegaría a Quito el 13 de agosto para sumarse al paro nacional. La marcha fue masiva

y, si bien compartían con las élites el deseo de evitar la reelección, logró distanciarse de la derecha que marcaba el ritmo de la oposición al gobierno. La movilización recuperó las calles como espacio simbólico; y, puso en la agenda pública las demandas de las organizaciones. Por un lado, reclamaban una *reforma agraria que logre la redistribución del 60% de las tierras cultivables*, la derogación de la *Ley de Aguas* y la recuperación de la *educación intercultural bilingüe*. Por otro lado, articulaban las demandas en oposición a las *enmiendas constitucionales* que permitían la reelección presidencial y toda ley que *afecte la naturaleza* (Asamblea Popular, 2017).

El gobierno repitió el arsenal ensayado previamente (discursos del presidente, sabatinas, movilización de ministros y despliegue de medios de comunicación), ubicó a las acciones como parte de una “restauración conservadora” y llamó al diálogo a la población. Al mismo tiempo, reforzó su presencia en las calles convocando y articulando a sus aliados políticos (Alianza Indígena, Parlamento Obrero, Central Única de los Trabajadores, fracciones del Partido Socialista y el Partido Comunista), pero a pesar de los esfuerzos decidió cambiar la acción por el “Festival de la alegría” en la Plaza Grande.

El presidente acusó a las movilizaciones de ser parte de una conspiración internacional, reunió a

15 mil policías e intervino las protestas. Las movilizaciones crecieron y se expandieron en distintas provincias (Pichincha, Guayas, Cotopaxi, Cañar, Loja y Pastaza). Finalmente, la acción terminó con un saldo complejo para las organizaciones: 126 detenidos, entre los cuales, tres recibieron detención preventiva y once fueron procesados por ataque y resistencia. Nuevamente, la defensa legal de los y las dirigentes, el acompañamiento de las organizaciones, la contención de las familias y la denuncia del uso de la judicialización de la protesta se convirtieron en la relación con el gobierno.⁴ En el 2017, la CONAIE pondrá en conocimiento de la CIDH sobre 197 casos de persecución y criminalización de dirigentes (CONAIE, 2017). Así, al final de las jornadas, el gobierno se vio obligado a retirar las enmiendas constitucionales y la ley, las organizaciones ganaron las calles, pero terminaron enredadas con la judicialización de sus dirigentes y fue la oposición de derecha quien escaló políticamente. Al final del año, el gobierno volvió a enviar las leyes

4 Las denuncias por las organizaciones de derechos sobre criminalización y judicialización de dirigentes por parte del gobierno están sistematizadas en distintos informes: Defensoría del Pueblo (2011); INREDH (2011); CEDHU, Acción Ecológica e INREDH (2012); Amnistía Internacional (2012); Programa Andino de Derechos (2012); ISP (2012).

y en diciembre del 2015, la Asamblea Nacional tramitó la elección indefinida de autoridades de elección popular, pero puso una transitoria en la cual dejó claro que el presidente no podría reelegirse.

El retorno de las élites y la movilización popular

Consensos conservadores

Las movilizaciones del 2015 y la presión de las élites hicieron que la idea de una reelección fuera costosa para el gobierno y encontraron en Guillermo Lasso el eje de articulación contra Alianza PAÍS. Para las elecciones de 2017, decidirse por Lenin Moreno frente a Jorge Glas fue un cálculo político en función de la intención de voto. Las organizaciones de izquierda no lograron un acuerdo y una figura propia; en el Pachakutik operaba el deseo de una alianza con Guillermo Lasso y generó una confrontación interna en la cual los dirigentes y la CONAIE tuvieron que movilizarse para impedirla. Al final, optaron por ir con el general Paco Moncayo, de la Izquierda Democrática, en una propuesta más moderada que no logró una votación importante.

Moreno y Lasso llegaron a la segunda vuelta, y Alianza PAÍS resultaba más amenazante que el banquero, en ese momento. Yaku Pérez (2017), presidente de la ECUARUNARI, la columna vertebral de la CONAIE, afirmó que:

Es preferible un banquero que una dictadura que nos ha despojado de nuestros territorios, que nos ha declarado en estado de excepción, que nos ha metido a la cárcel. Yo he estado 5 veces preso durante este gobierno, he estado en el hospital. Mis hermanos el presidente de la Federación Shuar acaba de ser detenido, Clever Giménez, Fernando Villavicencio en la clandestinidad, 700 hermanos criminalizados, los hermanos Saraguro, los hermanos Shuar. No podemos vivir con una amenaza del extractivismo, cerrando escuelas comunitarias, acabando las instituciones indígenas, perseguidos, insultados, sembrando odio.

Moreno ganó en una apretada votación por el 51,16%, contra el 48,84% de Guillermo Lasso. En la campaña se enfatizó en el carácter de buen hombre, su trabajo en la Misión Manuela Espejo, destinada a mejorar el bienestar de los sectores discapacitados y su infranqueable apego con Rafael Correa:

Ese señor (señala un cuadro con la foto del Presidente Correa) es extraordinariamente trabajador. Uno de los mejores hombres que ha tenido la patria, sino el mejor que ha tenido la patria. Ese hombre es extraordinariamente cariñoso con su familia, ama profundamente al Ecuador, es inte-

ligente, es valiente, es frontal, a veces demasiado frontal para mi gusto, pero si un hombre no tiene virtudes, no hay cómo perdonarle defectos. Este proceso se convertirá en leyenda. Quienes estamos participando, quienes hemos participado en esa leyenda nos sentiremos orgullosos de comunicarle a nuestros hijos y a nuestros nietos todo lo que hicimos y todo lo que logramos (Moreno, s/r).

Dos veces vicepresidente y hombre de confianza de Rafael Correa, suponía la continuidad de la propuesta progresista; su carácter amable suponía una dirección menos beligerante; y, sus vínculos con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del cual había sido militante en su juventud, abrían un margen para las posiciones de izquierda al interior del mismo gobierno. En la elección preocupaba más Jorge Glas, quien había sido el último vicepresidente y estuvo a cargo del proceso de Transición Energética y Productiva, eje central del modelo de desarrollo de la Revolución Ciudadana.

Empero, el nuevo gobierno se distanció de su amigo, el “mejor hombre que ha tenido la Patria”; aprovechó una ola de denuncias de corrupción y tomó una que salpicó al vicepresidente para enjuiciarlo; en poco tiempo se convirtió en el centro de polarización y oposición a las herencias de la Revolución Ciudadana; aprovechó las tensiones

que Rafael Correa había cultivado en sus diez años y propuso un Diálogo Nacional con el cual dio forma a un *consenso anticorreísta*, arriba con las élites y los medios de comunicación, abajo, con las organizaciones sociales. Con el diálogo, el gobierno repitió el lugar incómodo de las movilizaciones del 2015, donde las organizaciones sociales compartían agenda con los intereses de las élites, pero en esta ocasión no intentaron diferenciarse.

El “consenso anticorreísta” se convirtió en un *consenso social* poderoso, estaba en el presidente, en los medios, en las élites, en la Asamblea Nacional, y en las organizaciones. El discurso pasó de la confrontación con Correa, a poner bajo sospecha de corrupción cada escuela y carretera de la Revolución Ciudadana. Así, el anticorreísmo se convirtió en un dispositivo gubernamental con el cual, no solo, disputó el escenario, sino que fracturó la estructura y bancada de Alianza PAÍS, orillando a la Revolución Ciudadana. El maridaje entre anticorreísmo y corrupción sirvió para justificar sus críticas a las instituciones estatales y renovar el viejo proyecto neoliberal, alineándose con las élites y subordinándose a los intereses de los Estados Unidos.

En ese “consenso” desplazó a las organizaciones indígenas campesinas aliadas de Correa y promovió un vínculo con las organizaciones que estaban en la oposición. Al movimiento indígena le devolvió

la sede a la CONAIE; prometió volver a abrir la Universidad Indígena Amautay Wasi; indultó a varios de los dirigentes judicializados; colocó a Humberto Cholango, ex presidente de la CONAIE, en la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) y la Contraloría General del Estado impulsó la revisión de contratos petroleros.

Sin embargo, las condescendencias del gobierno buscaban negociar una consulta popular con el claro objetivo de descorreizar las instituciones del Estado o eliminar las fidelidades a Correa.¹ En esa consulta, el gobierno negoció con las organizaciones una pregunta para restringir la explotación en el Yasuní, y otra para restringir la minería a cielo abierto, dos temas centrales del enfrentamiento con el gobierno de Correa. Finalmente ganó

1 Entre el 2017 y 2018 impulsó un referéndum y consulta popular para eliminar la reelección indefinida, establecer la muerte civil de los funcionarios públicos culpables de corrupción, instaurar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio y cambiar su elección a votación popular, eliminar la prescripción de delitos sexuales contra niños y adolescentes, prohibir la minería metálica en zonas protegidas, eliminar la ley de plusvalía y reducir considerablemente la zona de extracción petrolera del Yasuní ITT. Tras la votación general, la ciudadanía se pronunció de forma afirmativa, dándole un triunfo a la opción «Sí» con más del 60 % en las siete preguntas. <https://n9.cl/yezdc>

la consulta y varias organizaciones apostaron a disputar el espacio, calcularon que la coyuntura permitiría reinstitucionalizar el Estado al fortalecer su “independencia”, a nombre de eliminar las lealtades correístas para democratizar las instituciones. El movimiento indígena participó con Luis Macas –dirigente histórico fundador de la CONAIE– en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t), apoyó la presencia de María Arboleda y Julio César Trujillo, viejos militantes de los movimientos sociales.

Las facultades extraordinarias que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social heredó de la consulta popular legitimaron su intervención en las instituciones, cesó a veintisiete funcionarios en seis meses y nombró a treinta y un nuevos bajo concursos de méritos y oposición, ternas enviadas por el Ejecutivo y listas de candidatos de todas las Funciones del Estado (*El Comercio*, 2019). El proceso fue intenso, abrió una clara disputa del gobierno, las élites políticas y las organizaciones por ocupar las instituciones del Estado. El movimiento indígena, sin consensos previos, aceptó a Diana Atamaint en la presidencia del Consejo Nacional Electoral. En el acelerado proceso de reformas y cambios institucionales, las organizaciones dieron algunos pasos: se abrió posibilidad de una consulta popular contra la minería en el Cantón Girón, la

primera consulta popular legalizada por el Consejo Nacional Electoral; se creó una Comisión Auditora para revisar el proceso de los Yasunidos; y desde la Defensoría del Pueblo se iniciaron varios procesos en la defensa de derechos de la naturaleza, los trabajadores y los dirigentes sociales. Al final del día, el balance no fue el mejor, el CPCCS-t intervino en las instituciones sustituyendo las lealtades de Correa, pero cedió las instituciones a los viejos poderes y el CNE terminó doblegado a los intereses del gobierno.

La alianza de Moreno con las élites fue tal que les terminó cediendo la administración del gobierno y subordinó el Estado a sus intereses, asegurando así sus ganancias en medio de la crisis. En poco tiempo, la población regresó a las condiciones de desempleo y pobreza de los años noventa. Un proceso acelerado de reformas legales que, en la Asamblea Nacional, estuvieron avaladas por una parte de la bancada del Pachakutik; en ese caso, el anticorreísmo sirvió para avalar las decisiones, pero fue evidente que no existía estrategia exitosa de negociación con el gobierno. A diferencia de la acción de Abdalá en 1997 y Gutiérrez en 2003, la organización no tuvo capacidad de contener la actitud pragmática de varios dirigentes, haciendo evidente una serie de tensiones y conflictos al interior del movimiento. El problema es que las tensiones

y crecientes posiciones pragmáticas se alinean con los intereses de las élites y ponen en duda la solidez ideológica del movimiento.

Lo curioso del momento es que el gobierno de Moreno avanzó fragmentando a Alianza PAÍS, orillando los sectores leales a Correa, desarmando el entramado institucional, trasladando el gobierno a manos de la derecha y las élites, construyendo una agenda regresiva de derechos y reinstalando un modelo de austeridad estatal, sin que haya importantes acciones por parte de su propia estructura. Con perplejidad, asistimos al desarme de una de las experiencias políticas más importantes del país. Aún queda por resolverse ese hecho. ¿Cómo explicar que aquella experiencia de gobierno fuerte y de “modernización” que se sostuvo durante diez años se desmorone en tan poco tiempo?

Octubre popular y plurinacional

Aunque los núcleos de la Revolución Ciudadana denunciaron públicamente los efectos de la reforma institucional y las organizaciones rompieron el diálogo presionado al gobierno, este avanzó sin mayor resistencia social y política, la polarización

correísmo-anticorreísmo franqueó las posibilidades de cambiar el escenario desde una articulación amplia. Lo cierto es que el movimiento indígena y los trabajadores estaban entrampados en negociaciones con el gobierno; y las organizaciones de Alianza PAÍS, algunas negociaban con el gobierno y otras, las más fieles a Correa, carecían de fuerza.

Cuando el gobierno anunció la eliminación de los subsidios a la gasolina, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la CONAIE intentaron convocar a un paro nacional y un levantamiento, pero la reacción vino de los taxistas que movilizaron al gremio en todo el país y también fueron los primeros en romper las filas al negociar con el gobierno. Sin embargo, la movilización avanzó, llegaron los estudiantes, los conflictos territoriales y locales, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores y finalmente las comunidades indígenas y campesinas. La militancia de la Revolución Ciudadana y su máximo dirigente demandaban la salida de Moreno y convocaron a la ciudadanía a movilizarse. Todas las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo a sectores medios no organizados, confluyeron en una *insurrección popular plurinacional* (Ramírez, 2020).

Las organizaciones tomaron las calles y convirtieron al parque de El Arbolito en la central de operaciones. Los medios de información levantaron

un cerco mediático mostrando solo los actos violentos, el incendio de la Contraloría General del Estado –hecho que hoy sigue en investigación con indicios de haber sido un autoatentado–, un tanque de gas que “voló” una noche, la intervención en la estatua de Isabela Católica y las calles ennegrecidas por la batalla entre los manifestantes y la policía. Fueron los celulares en mano, la acción de los comunicadores populares y los medios de comunicación alternativos los que rompieron el cerco, difundieron los hechos (*AnRed*, 2019).

La movilización fue posible gracias a la solidaridad de una multitud de actores. Las universidades abrieron sus puertas como refugio para los manifestantes, en especial los indígenas que venían de distintas regiones del país. A la acción se sumaron miles de jóvenes que armaron centros de acopio, brigadas para la acogida de los manifestantes, centros para el cuidado y atención de niños, y ollas populares, convirtiéndose así en “corazón de la protesta” (Noriega Donoso y Criollo Galván, 2020). Las redes de indígenas en las ciudades se organizaron para abastecer los centros de acopio, las ollas comunitarias o alimentar directamente a los manifestantes en las calles. Las comunidades indígenas activaron su memoria histórica y se convirtieron en escuelas de la movilización, centros de resguardo y cuidado para el relevo de manifestantes

(Andino Estrada, 2020). Aunque el foco del levantamiento se concentró en Quito, las acciones de protesta paralizaron el país. En las regiones, provincias y cantones con poblaciones indígenas se sintió con mayor fuerza; en varios casos, las organizaciones tomaron las gobernaciones provinciales, cerraron las vías, organizaron marchas y plantones que ocuparon los parques. En algunas regiones marcharon hacia las plantaciones de flores y plantas de leche convocando a los trabajadores a participar de la insurrección. En otras se dirigieron a los pozos petroleros para cerrar las fuentes de suministro y hacia las antenas de televisión en una clara acción de protesta contra los medios de comunicación.

En las provincias de la Costa, las organizaciones campesinas y la población se sumaron a la insurrección, con menos fuerza, pero ocuparon las plazas y calles coreando “Quito aguanta que Machala-Quevedo-Guayas-Esmeraldas se levanta”; en algunos lugares se organizaron para enviar suministros a Quito y sostener la concentración, en otros casos viajaron a la capital para alimentar la movilización. Cuando el presidente Lenin Moreno decidió refugiarse en Guayaquil –bastión de las élites más rancias–, sobresalió el apoyo que recibieron los indígenas en su marcha. La respuesta de la Costa, en un país regionalizado como el Ecuador, dio cuenta del cambio en las fronteras étnicas y

regionales. De la misma forma, en las calles y las escasas tarimas de la movilización, los viejos aliados del movimiento (FENOCIN, CNC y FEINE) volvieron a encontrarse.

La respuesta del gobierno fue brutal, movilizó a la policía y militares que desplegaron una gran cantidad de efectivos con el objetivo de reprimir a los manifestantes. Según la Defensoría del Pueblo, al terminar las movilizaciones, se registraron once muertes, al menos cuatro de estas habrían sido causadas por uso excesivo de la fuerza policial. Hubo 1.507 personas heridas y 1.192 detenidas. Además, el gobierno aprovechó las declaraciones de los dirigentes de la Revolución Ciudadana que demandaban su salida para ubicar al correísmo como responsable de la violencia y enjuiciarlos con el mismo código penal que habían aprobado cuando eran mayoría en la Asamblea y bajo los mismos “delitos” que sirvieron para judicializar otrora a los dirigentes indígenas.

Tras diez días de movilización, la CONAIE aceptó sentarse con el gobierno con la ONU como garante. El debate fue abierto y televisado en vivo por pedido de las organizaciones para transparentar el diálogo. Los argumentos de la CONAIE fueron simples y claros, explicaron con tractores los efectos del alza de combustibles y asumieron la representación nacional: “Señor presidente [de la República],

no estás hablando con la CONAIE [...] No hemos venido solos, sino que estamos acompañados de la gente” (Vargas, 2019). Finalmente, el gobierno se vio obligado a cambiar el Decreto Ejecutivo que disponía el aumento y la población festejó el hecho como una gran victoria. Mientras que la CONAIE (2019), en un Consejo Ampliado, emitía quince resoluciones que empezaban reconociendo el triunfo del pueblo y el respaldo los luchadores sociales:

Reconocer el triunfo colectivo de todas las organizaciones que hacemos el movimiento indígena así como, la casa de la cultura ecuatoriana, las diversas universidades: Central, Salesiana, Católica, Andina Simón Bolívar, FLACSO, a los comunicadores/as comunitarios independientes, a las brigadas médicas, a los trabajadores, a los transportistas, a los estudiantes, a los docentes, a las mujeres, a los jubilados, a los barrios de Quito y a todos los sectores organizados y no organizados del campo y la ciudad a nivel nacional, por la iniciativa y voluntaria participación en las jornadas de movilización por la derogatoria del decreto 883. Extender un reconocimiento a todos los luchadores sociales, y a quienes dejaron su vida en la lucha, a los cientos de heridos, víctimas de la violencia estatal y a todos quienes permanecieron en pie de lucha desde las comunas, organizaciones, barrios populares.

Atilio Boron (2019), en defensa de los avances de la Revolución Ciudadana, resaltó que la negociación centrada en el alza de pasajes dejaba de lado la agenda contra el neoliberalismo y la denuncia de la violación de derechos. Para el autor, sin ninguna crítica a las herencias de la Revolución Ciudadana y su clarísima incapacidad de disputar la movilización social, la negociación mostraba la complicidad de la dirigencia con Moreno, la dependencia del movimiento con las ONG y su visceral anticorreoísmo. Un relato que sitúa el conflicto CONAIE-Correa (progresismo-antiprogresismo), sin observar que la polarización no se explica por fuera de las formas de ordenar la política de la misma Revolución Ciudadana.

La insurrección fue enorme y su magnitud fue tal que en otro momento habría sido suficiente para expulsar al presidente, pero el que “se vayan todos” o “fuera Moreno” no fue el espíritu mayoritario de la movilización; sobre todo, la alianza política entre las élites, los medios de comunicación, el FMI, la embajada y fuerzas armadas no mostró fracturas y operó con todas sus fuerzas para sostener al presidente quien se había convertido en la vía más segura para ocupar el Estado y la herramienta más eficiente para combatir a Correa.

En las calles, el movimiento indígena fue una organización potente. Sus comunidades se

sintonizaron con el momento, en algunos casos obligaron a las organizaciones de segundo grado a posicionarse, sus autoridades (juntas parroquiales, alcaldes, prefectos) canalizaron recursos y la CONAIE reveló que conserva un enorme capital moral, suficiente para que el resto de organizaciones encuentren en ella un espacio de agregación política y de representación popular. Así, ocupó la cabeza de la imagen política, pero como el resto de movimientos sociales que no tuvieron la capacidad de disputar-negociar la dirección del proceso, llegó sin resolver su fragmentación y polarización interna. Tras la movilización, convocó a un Parlamento de los Pueblos para elaborar un proyecto económico de cambio, al cual acudieron una enorme cantidad de organizaciones, para definir las acciones hacia el futuro: “Minga por la Vida al Pueblo Ecuatoriano”:

¡A los pueblos que luchan! ¡A las mujeres y hombres que levantan sus voces por acabar con el capitalismo y construir un mundo más justo, comunitario, equitativo y solidario! ¡A quienes ponen la vida en el centro y el cuidado en los corazones! ¡A los trabajadores y las trabajadoras! (Parlamento Plurinacional de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador, 2020).

Fue un momento de articulación poderoso que abrió la esperanza de recuperar la capacidad de la sociedad para contener la renovación del neoliberalismo; pero la realidad fue otra, no hubo la sabiduría política suficiente para recomponer la alianza, la polarización política con Correa siguió operando, y la pandemia llegó con virulencia; el uso político del distanciamiento y el estado de excepción sirvieron al gobierno, no solo para sortear la iniciativa de las organizaciones, sino para gestionar la crisis a favor de las élites.

El agua o la banca

Hacia las elecciones del 2020, a pesar de que el gobierno de Moreno persiguió a los y las dirigentes y boicoteó la posibilidad de un partido, la Revolución Ciudadana se mantenía como la mejor opción electoral con grandes distancias frente al resto de candidatos (inicialmente había 19 precandidatos que, en su mayoría, se presentaron como una estela electoral conservadora y pro-mercado). Para el movimiento indígena, Octubre alumbró el momento de una manera diferente, ubicó al movimiento como una opción electoral, pero el proceso para llegar a

elegir un candidato mostró sus debilidades. En la organización se abrió una tensión entre Leónidas Iza, quien había tenido un rol protagónico en las movilizaciones de Octubre, representando una nueva camada de dirigentes de izquierda mariateguista que reclaman para sí la herencia del primer levantamiento y prometen un cambio organizativo (Iza, Tapia y Madrid, 2021, p. 116)² y Yaku Pérez, quien se había convertido en una personalidad de las luchas ecologistas y sorprendió ganando la prefectura del Azuay en el 2017, con un discurso ambientalista anti-minero claro. Ambas figuras, que gozaban de un enorme aval político y organizativo, creaban una oportunidad única para abrir el debate interno, promover una amplia participación y fortalecer la organización. Sin embargo, los proyectos personalistas y el cálculo político pesaron más, el conflicto interno se hizo visible y Leónidas Iza no se presentó a las primarias. Así, sin lograr un acuerdo claro al respecto, Yaku Pérez pasó a ser

2 Aunque las corrientes de izquierda al interior del movimiento indígena no son nuevas, sobre el movimiento Mariátegui hay mucha especulación al interior, pero *El Estallido*, de Iza, Tapia y Madrid (2020), constituye un primer documento de su relato, su comprensión de la política, su entendimiento de los otros y su proyecto de cambio, en el cual el Estado Plurinacional desaparece.

el candidato a presidente por Pachakutik, y luego, Iza será elegido presidente de la CONAIE. Algunos soñaron con una alianza interna en donde uno encabezará la candidatura a la presidencia y el otro la Asamblea Nacional, pero la propuesta se presentó débil y deslegitimada por los conflictos. La elección de la vicepresidenta estuvo llena de errores y la postulación de los candidatos a la Asamblea Nacional priorizó la capacidad para sostener sus campañas más que su solidez ideológica.

Los límites del proceso, los errores del momento y las declaraciones de Pérez en 2017 a favor de Lasso sirvieron de caldo de cultivo para una campaña de desprestigio por parte de la Revolución Ciudadana que intentó hacer de Yaku Pérez un camaleón de la política, un personaje violento, un promotor de guerrillas tipo colombiana, un huasipungo de las ONG y la CIA (*Los Periodistas*, 2020). Sin embargo, contra todo pronóstico, Yaku Pérez, quedó medio punto atrás de Guillermo Lasso (19,39% vs. 19,74%) para la segunda vuelta electoral contra el candidato de la Unión por la Esperanza (UNES), que acogía el candidato de la Revolución Ciudadana (32,7%). Los votos del progresismo con los de Yaku sumaban 52,11% y podían leerse como la aspiración mayoritaria de la sociedad frente a la derecha. La diferencia tan escasa impulsó una denuncia de fraude electoral en la que Pérez presentó 16 mil actas con inconsistencias

en el CNE, demandó el recuento de votos de 6 provincias y la revisión de 17 provincias; también logró un acuerdo con Lasso para revisar los votos y saldar las dudas, pero su denuncia y el acuerdo no prosperaron; el CNE avaló los resultados sin resolver la denuncia. La Revolución Ciudadana pudo plegarse a las demandas de Yaku, pero prefirió mantenerse fuera del dilema; disputar la elección frente al banquero era más fácil que entrar en la lucha contra el ambientalismo de Yaku. Independientemente de la derrota, tras Octubre, el movimiento indígena lograba una bancada histórica, probablemente irrepetible, y se convertía en la segunda minoría con veintisiete asambleístas, justo detrás de UNES que lograron cuarenta y nueve.

En la segunda vuelta, Pachakutik y el voto indígena se convirtieron en un escenario complejo, se debatió hacia dónde canalizar el voto ante la encrucijada de votar por el banquero de derecha y Correa, no era UNES o la Revolución Ciudadana, sino el caudillo. Al interior del movimiento indígena un sector presionó por una alianza con Lasso y, respecto a UNES, el mismo Leónidas Iza fue ambiguo al respecto, pues planteó la posibilidad de una alianza amplia bajo la condición de que el correísmo reconozca sus errores. Sin embargo, en el congreso ampliado ganó la tesis por el Voto Nulo. En medio de la polarización, las mismas estructuras

de Alianza PAÍS presionaron por una articulación con el movimiento indígena, resaltaron la figura de Leónidas Iza, Andrés Arauz habló de la posibilidad de hacer una asamblea de las tres izquierdas (Izquierda Democrática, UNES y Pachakutik) y en un momento logró el respaldo de Jaime Vargas, entonces presidente de la CONAIE, si bien en el fondo, pesaba la visión del líder máximo.

(¿Es posible una alianza progresista para las próximas elecciones?) (...) Siempre vamos a trabajar por el pueblo indígena, yo viví con el pueblo indígena, una de mis misiones fundamentales es tratar de sacar de la pobreza a los indígenas injustamente discriminados durante siglos; pero *hay indígenas que no son buenas personas, que mienten, que son mala gente, que engañaron, que jugaron con sus muertos, que apoyaron al gobierno, le dieron una salida*, cuando ya había matado a 11 personas, 1300 heridos, 1200 detenidos; y baja el precio del combustible y ¡ya no hay problema señor Moreno! (...) Con esa gente que juega con su propio pueblo, con esa gente que miente, que no es sincera, que tiene doble moral, por el *odio a Correa* prefirió apoyar a un gobierno nefasto como el Moreno que nos entrega al FMI, a las oligarquías, para traicionar a toda América Latina, *con esa gente no podemos ir a ningún lado* (Correa, 2020).

Así, cuando llegamos a las elecciones, fue una sorpresa que Guillermo Lasso, tras contratar a Duran Barba –prestigioso estratega electoral– y cambiar su propuesta, logrará superar a Andrés Arauz, de UNES. Pero sorprendió más que el voto nulo lograra cifras históricas, ya que en muchas de las provincias de la Sierra llegó a ser más alto que los votos obtenidos por los candidatos. Según Rodríguez Sandoval (2021), el voto nulo se convirtió en el actor que derrotó a la propuesta de la Revolución Ciudadana, gran parte de la Sierra Centro, el Azuay y la Amazonía Sur, zonas de alta densidad indígena y enfrentadas a la minería, siguieron la convocatoria. Al resultado hay que sumar un par de elementos centrales: la *estrategia electoral* de la Revolución Ciudadana no logró superar su núcleo duro de partida; ya desde el 2014 mostraba límites para seducir al electorado; Moreno resultaba un claro ejemplo de lo que podría pasar con otro candidato de su base y sus discursos por el ambiente, la relación con las organizaciones, los derechos sexuales y reproductivos, resultaban artificiales en relación a las posiciones del mismo Correa al respecto.

Finalmente, la Asamblea Nacional se componía de las tres minorías más importantes: Unión por la Esperanza (UNES) con cuarenta y nueve asambleístas, el Pachakutik con veintisiete y la Izquierda Democrática (ID) con dieciocho, que se situaban

del centro a la izquierda; luego un bloque de derecha integrado por Creando Oportunidades (CREO), partido oficial con doce escaños, y Partido Social cristiano (PSC) con dieciocho, y finalmente once partidos más que sumaron trece asambleístas. De 137 asambleístas, el centro izquierda con noventa asambleístas pudo lograr una alianza mayoritaria frente al bloque de derecha. Pero el escenario estuvo marcado por la polarización correísmo-anticorreísmo: aunque UNES y Pachakutik intentaron un diálogo inicial, UNES condicionó el diálogo al excluir a Guadalupe Llori y Salvador Quishpe que habían sido figuras públicas opositoras de Rafael Correa; y la ID y el Pachakutik lograron un acuerdo programático al centro; el resultado fue muy pobre pues la disputa correísmo-anticorreísmo volvió a operar como una enfermedad incurable. El elemento más triste del proceso es que, en nombre de la gobernabilidad, Rafael Correa y el Pachakutik prefirieron negociar con Lasso que entre sí. En la negociación, Correa había logrado un acuerdo con el PSC y CREO para dejar la presidencia en manos de la derecha más rancia, el PSC. Sin explicaciones claras, Lasso rompió el acuerdo y negocio con Pachakutik, quien “ganó” la presidencia de la Asamblea Nacional y a partir de ese momento perdió toda posibilidad de impulsar sus propias iniciativas.

Si bien era previsible la erosión de las bancadas, el banquero que llegó con debilidad y casi sin congresistas, a febrero del 2022 gobierna con una mayoría impensable. CREO y los independientes que abandonaron sus bancadas (tres de UNES, dos del Pachakutik, tres del PSC) logran sumar veintiocho asambleístas en la Bancada del Acuerdo Nacional, convirtiéndose en la segunda fuerza electoral; y frente a la ley de reforma tributaria, claramente neoliberal y parte de la agenda con el FMI, logró el apoyo de la Revolución Ciudadana y una parte del Pachakutik. El gobierno, a pesar de su clara orientación neoliberal que hoy marca el ritmo de las nuevas privatizaciones, venta de activos estatales, reducción de inversiones sociales, reafirmación de tratados de libre comercio, afirmación de las políticas extractivas, precarización laboral, flexibilización ambiental en muy clara alineación con los intereses de las élites y el FMI, logra sortear la presión política por sus inversiones en paraísos fiscales y revivir el neoliberalismo por despojo de los años noventa.

Aunque un grupo de once asambleístas de Pachakutik se declararon en rebeldía al denunciar la complicidad del resto de la bancada con los intereses del gobierno y la CONAIE ha hecho varias declaraciones reclamando coherencia con los postulados históricos del movimiento indígena y

amenazándolos de aplicar justicia indígena, la organización mostró, no solo que no tiene capacidad de contener el juego pragmático de sus assembleístas, sino que Guadalupe Llori ha sido enfática en decir que la CONAIE no tiene nada que hacer en las competencias del Pachakutik. El escenario frente al gobierno del banquero es un proceso abierto, pero su apuesta extractiva y su orientación neoliberal condicionan el contexto de movilizaciones sociales en donde, a pesar de los límites del Pachakutik en la Asamblea Nacional, el movimiento indígena cumple un rol de oposición central.

Reflexiones finales

El movimiento indígena es, sin duda, la organización popular más importante del país. En treinta años transformó el escenario político convirtiéndose en un actor central de la política nacional, un hecho que en sí mismo fue una “revolución”. Sin embargo, aunque el progresismo y la constitución de 2008 representaban la gran promesa de contención al neoliberalismo, la relación con el movimiento fue tensa y, en muchos aspectos, su inclusión política a través del reconocimiento de derechos colectivos fue un retroceso. El regreso del Estado fue un contexto complejo y, para los movimientos sociales en su conjunto, se tradujo en su debilitamiento, polarización y fragmentación.

Hoy el movimiento indígena y los movimientos sociales se enfrentan de manera diáfana al retorno de las élites y el proyecto neoliberal, y la Insurrección de Octubre se mostró como la primera batalla de la guerra por venir. Pero, a diferencia de los años noventa, cuando las élites entraban en

crisis, en este período han recuperado espacio y fortaleza, no son las mismas y están fuertemente articuladas. En medio de una crisis económica prolongada, necesitan del Estado para mantener su tasa de ganancia y su inserción en el mercado global, no están dispuestas a negociar la distribución de la renta, pero van a imponer su agenda.

Es complejo imaginar cuál es o será la capacidad del movimiento indígena para mantenerse como el actor central de la movilización y representación popular, o cuál será su inteligencia para recuperar la articulación más allá de sí mismo y potenciar la movilización. No sabemos si logrará acumular la fuerza necesaria para contener la recomposición del neoliberalismo y sus élites. No pretendemos ensayar las respuestas a preguntas de tal tamaño.

Es importante situar que el movimiento indígena de hoy tampoco es el mismo que el de los noventa. A lo largo de estos años se ha convertido en un espacio de representación política que articula a una base social bastante más amplia que los indígenas, “no todos los indígenas se movilizaron y no todos los que se movilizan son indígenas” (Ospina y Guerrero, 2003). En los ochenta logró la articulación-representación de los indígenas, pueblos y nacionalidades; en los noventa se convirtió en la plataforma para la articulación de los movimientos sociales frente al neoliberalismo; durante el

período progresista, su condición territorial lo convirtió en la plataforma para encabezar la disputa contra el extractivismo y cuestionar el sentido de las promesas de desarrollo. La organización creció, amplió su representación política y se consolidó como un movimiento político de carácter territorial que, en las últimas elecciones, fue actor central del voto nulo, una fortaleza que está en la mira de todas las fuerzas políticas.

La CONAIE es una organización que tiene una enorme capacidad de renovar sus cuadros políticos gracias a la lógica de ascenso organizativo que va de la comunidad a la organización de segundo grado, luego la regional y finalmente, la nacional. Hay muy pocos dirigentes que han sido presidentes dos veces. Cada nueva dirección hereda la tarea de articular complejidad interna, que exige de *coaliciones* antes que personalismos.

Además, hoy, su base social es menos campesina, no solo porque la mayor parte de los indígenas viven en las ciudades, sino porque el modo de ser indígena campesino ha cambiado, resultado de las dinámicas propias del capitalismo, descampesinización, descomunalización y diferenciación, las cuales están presentes, son visibles y se intensifican debido a la expansión de la “modernidad” en el campo (urbanización, tecnologías de la información, medios de comunicación, entre otras).

Sin embargo, la Insurrección de Octubre mostró que la condición indígena comunitaria persiste de muchas formas. Sin perder su arraigo territorial, las redes comunitarias y de parentesco, aun en la ciudad, reproducen sus sentidos de pertenencia y lealtad con el movimiento, una diáspora de enorme potencialidad política.

En esa dinámica acelerada de transformación social, la etnicidad, interculturalidad y el Estado Plurinacional, que no son sinónimos, son debates teórico-políticos que necesitan “actualizarse”, sobre todo, porque para los nuevos sectores resultado de diferenciación social, no tienen el mismo significado que para aquella primera camada de intelectuales que lograron traducir en ese debate la experiencia de la sociedad del momento; para las nuevas tandas de dirigentes que se definen de izquierda tienden a subvalorar las “viejas” tesis de cambio (el libro *El Estallido*, por ejemplo, no tiene una sola reflexión al respecto y la única referencia está relacionada con una crítica al multiculturalismo). Empero, la *etnicidad* no puede verse por fuera de las relaciones interétnicas, las relaciones de poder, las condiciones de explotación y marginación que operan en la sociedad. Tomado de la propuesta de E. P. Thompson, la *etnicidad* es un sedimento cultural y una experiencia histórica que permite el encuentro y reconocimiento mutuo de esos

indígenas y no indígenas –no por nada se dice que “aquel que no tiene de inga, tiene de mandinga”–, un paso indispensable para organizar el sentido de sus disputas, el carácter de sus luchas y el alcance de su proyecto. Es un cimiento ideológico y tejido político fortísimo, contiene una serie de dispositivos y prácticas “culturales” que logran reproducir la fidelidad de y con las organizaciones locales, regionales y nacionales. Sin la *etnicidad* no habría sido posible consolidar el movimiento y su revolución, con sus luces y sus sombras.

Además, aunque el Estado Plurinacional y la Interculturalidad no suenan con el mismo estruendo, junto a los Derechos de la Naturaleza, la Soberanía Alimentaria, los Derechos Colectivos son parte de una propuesta de los mundos rurales al conjunto de la sociedad que hoy comparte el marco normativo nacional. Su materialización e implementación es un campo de disputa y, como tal, un proceso abierto hacia el futuro próximo.

Entre las sombras, el movimiento tiene pendientes grandes debates y cosecha los problemas de su creciente complejidad. La apuesta electoral se consolidó como una experiencia territorial donde es posible encontrar una amplia gama de ejercicios que intentan materializar el “proyecto plurinacional intercultural” (reconocimiento de la diferencia, democratización de poderes, gestión colectiva de

recursos, mayor inclusión, democracia participativa, justicia indígena, entre otras); sin embargo, hay una tensión creciente: la acción de los gobiernos locales es insuficiente para resolver los problemas de la exclusión estructural, y el acceso a los espacios de representación política se ha convertido en una posibilidad de ascenso social, acumulación y diferenciación. Para muchos dirigentes es más interesante ser candidato a una elección popular (juntas parroquiales, municipios) o ser parte de una institución pública que asumir la carga organizativa. En el espacio de la disputa electoral e institucional, frente al creciente personalismo de las autoridades, las organizaciones de base pierden capacidad de control sobre sus otrora dirigentes.

La diáspora, aunque políticamente se presenta como una potencia importante, no se tradujo en nuevas formas de organización social, con lo cual, es insuficiente para hacer del movimiento indígena un actor nacional. Su fuerza política y de movilización se encuentra en la Sierra centro sur y parte de la Amazonía, pero la falta de organizaciones fuertes en la Costa y en las ciudades grandes es una debilidad importante.

El movimiento indígena es mucho más que Pachakutik y la CONAIE. En tanto espacio de unión y agregación de disputas, frente a la crisis y pandemia en marcha, las organizaciones y otros sectores

demandan del movimiento articulación y unidad política. Lo que le ocurra a la CONAIE en el futuro marcará la política de los sectores populares. Sin embargo, la articulación y unidad no dependen exclusivamente del movimiento, sino de la fortaleza del resto de sectores. En este sentido, con excepción del movimiento de mujeres que ha encontrado las claves para convertirse en un fenómeno global, el resto y los movimientos sociales no logran salir de sus propias crisis. La izquierda, en sus múltiples definiciones y posiciones, es una “compleja trama organizativa” que necesita volver a pensarse. Así, aunque Octubre fue un proceso de movilización que alumbra la fortaleza del sedimento organizativo con la capacidad de sintonizarse a nivel nacional, la unidad de las izquierdas y las fuerzas populares es más una retórica que una realidad.

Entre las luces, la Insurrección de Octubre dejó claro testimonio de que el Ecuador es un territorio de movilizaciones, marchas, levantamientos y sublevaciones, un capital político con la fuerza para contener el desarrollo del neoliberalismo. Momentos de emergencia social en los que tanto indígenas y como no indígenas han logrado arrebatarse al poder la dirección. Sin dudas, el movimiento es un actor político central para los sectores populares, pero la posibilidad de retomar la historia y alinearse con los intereses de las inmensas

mayorías no es una tarea exclusiva del movimiento indígena. En ese sentido, el capitalismo no espera y el tiempo exige reconocer que, avanzar en la disputa, solo es posible trenzando la experiencia de esas múltiples luchas en las cuales, hombres y mujeres, están poniendo toda la creatividad posible.

Bibliografía

- Albornoz Peralta, Oswaldo (1971). *Las luchas indígenas en el Ecuador*. Guayaquil: Editorial Claridad.
- Almeida, Iliana (1993). *Indios: Una reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990*. Quito: ILDIS.
- Almeida, José (1993). *Sismo étnico en el Ecuador: varias perspectivas*. Quito: Abya - Yala.
- Amnistía Internacional (2012). *Para que nadie reclame nada ¿Criminalización del derecho a la protesta en el Ecuador?* Londres: Amnistía Internacional.
- Andino Estrada, Marco (2020). Las organizaciones indígenas campesinas de la Sierra centro en el levantamiento de Octubre. En Neptalí Martínez Santi, *Octubre*. Quito: Editorial Árbol de Papel.
- Barrera, Augusto (2001). *Acción colectiva y crisis política. El Movimiento indígena ecuatoriano en la década de los noventa*. Quito: Centro de Investigaciones Ciudad - ABYA YALA.
- Boron, Atilio (2019). Un Octubre que fue Febrero. <https://atilioboron.com.ar/un-octubre-que-fue-febrero/>

- Burgos Guevara, Hugo (1970). *Relaciones interétnicas en Riobamba: Dominio y dependencia en una región indígena ecuatoriana*. México: Instituto Indigenista Interamericano.
- Carrasco, Hernán (1993). Democratización de los poderes locales y levantamiento indígena. En José Almeida, *Sismo Étnico en el Ecuador*. Quito: Abya Yala.
- CEDHU, Acción Ecológica e INREDH (2012). *Informe Criminalización a los defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza*. Quito: CEDHU, Acción Ecológica e INREDH.
- CONAIE (1989). *Las nacionalidades indígenas en el Ecuador: Nuestro proceso organizativo*. Quito: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE- TINKU.
- CONAIE (1994). *Proyecto Político de la CONAIE*. Quito: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE.
- CONAIE (2017). Denuncias de violencia, hostigamiento y criminalización defensores de derechos humanos se expondrá en la CIDH. <<https://n9.cl/8ob1c>>
- CONAIE (2019). Resoluciones del Consejo Ampliado de la CONAIE. En *Octubre*. Quito: Editorial Árbol de Papel.
- De Sousa Santos, Boaventura (2020.) *Ecuador la insurrección de Octubre*. Buenos Aires: CLACSO.

- Defensoría del Pueblo (2011). *Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: desafíos para un Estado Constitucional de derechos*. Quito: DPE.
- Guerrero Barba, Andrés (1991) *La semántica de la dominación: el concertaje de indios*. Quito: Ediciones Libri Mundi.
- Herrera Revelo, Stalin (2017). *De la lucha por la tierra a la democratización conservadora*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Herrera Revelo, Stalin (2020). Movimientos indígena y campesino en el debate: estado del arte en el Ecuador. En Pablo Ospina Peralta, Patric Hollenstein y Sara Latorre (eds.), *Territorios, ruralidades, ambiente y alimentación en el Ecuador un balance de la investigación en el Ecuador*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Herrera Revelo, Stalin y Latorre Tomas, Sara (2013). Gobernar para extraer, dinámica del conflicto en el gobierno de Rafael Correa. En Stalin Herrera Revelo et al., *¿A quién le importa los guayacanes? Acumulación, gobierno y conflictos en el campo*. Quito: Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) - Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES). <<https://goo.gl/qM46JM>>
- Hobsbawm Ernest, Eric J. [1968 (1983)]. *Rebeldes Primitivos: Estudio sobre las formas arcaicas de Los Movimientos Sociales del Siglo XIX y XX*. Barcelona: Ariel.

- Ibarra, Hernán (1999). Intelectuales indígenas, neoin-
digenismo e indianismo en el Ecuador. *Ecuador
Debate* (48), 71-94.
- ICCI (2000). Editorial: Democracia y ajuste: una estra-
tegia a desarmar. *Boletín ICCI Rimay* (17), agosto.
- ICCI (2002). Editorial: Evaluación política del movi-
miento indígena ecuatoriano. *Boletín ICCI-Rimay*
(34), enero.
- ISP (2012). *Persecución y criminalización de la lucha
laboral en el Ecuador: periodo 2007-2011*. Quito:
Internacional de Servicios Públicos (ISP)-Centro
de Derechos Económicos y Sociales (CDES).
- Iza Salazar, Leónidas, Tapia Arias, Andrés y Madrid
Tamayo, Andrés (2020). *Estallido: La Rebelión de
Octubre en Ecuador*. Quito: Ediciones Red Kapari.
- Lentz, Carola (1997). *Migración e identidad étnica. La
transformación histórica de una comunidad indígena
en la sierra ecuatoriana*. Quito: Abya-Yala.
- Llucó, Miguel (2000). El movimiento indígena y la
construcción de una democracia radical. *Boletín
ICCI-Rimay*, (10), enero.
- Macas, Luis (2000a). Diez años del Levantamiento del
Inti Raymi de junio de 1990: Un balance provisio-
nal. *Boletín ICCI-Rimay* (15), junio.
- Macas, Luis (2000b). Movimiento indígena ecuato-
riano: una evaluación necesaria. *Boletín ICCI-Ary-
Rimay* (21), 5.

- Moreno Yáñez, Segundo (1976). *Sublevaciones Indígenas en la Audiencia de Quito: desde comienzos del siglo XVII hasta finales de las Colonias*. Alemania: Bonner Americkanistische Studien.
- Noriega Donoso, Jahiren y Criollo Galván, Gonzalo (2020) Sólo el pueblo salva al pueblo: centros de acopio y acogida humanitaria como corazón de la resistencia. En Franklin Ramírez Gallegos (ed.), *Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador*. Buenos Aires: CLACSO.
- North, Liisa (1985). Implementación de la política económica y la estructura del poder político en el Ecuador. En Louis Lefebvre, *La economía política del Ecuador: campo, región y nación*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- North Liisa y Cameron, John D. (2008). *Desarrollo rural y Neoliberalismo, Ecuador desde una perspectiva comparativa*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar – Corporación Editora Nacional.
- Ortiz Crespo, Santiago (2016). Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos. *Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales* (19), 45-66.
- Ospina Peralta, Pablo (2009). 'Nos vino el huracán político'. La crisis de la CONAIE. En Pablo Ospina Peralta, Olaf Kaltmeier y Christian Büschges (eds.), *Los Andes en movimiento. Sociedades andinas, Estado*

- y cultura política*. Quito: Corporación Editora Nacional / Universidad de Bielefeld / Universidad Andina Simón Bolívar.
- Ospina Peralta, Pablo y Guerrero, Fernando (2003). *El Poder de la comunidad: Ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos*. Buenos Aires: Colección Becas de Investigación CLACSO-ASDI.
- Ospina Peralta, Pablo et al. (2006). *En las fisuras del poder: Movimiento indígena, cambio social y gobiernos locales*. Quito: Instituto de Estudios Ecuatorianos.
- Programa Andino de Derechos Humanos (2012). *Informe sobre Derechos Humanos*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Ramírez Gallegos, Franklin (2009). El movimiento indígena y la reconstrucción de la izquierda en el Ecuador, El caso del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País. En Pablo Ospina Peralta, Olaf Kaltmeier y Christian Büschges (eds.), *Los Andes en Movimiento. Identidad y poder en el nuevo paisaje político*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional / Universidad de Bielefeld.
- Ramírez Gallegos, Franklin (2020). *Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador*. Buenos Aires: CLACSO.

- Rodríguez Sandoval, Javier (2021). El Voto Nulo y el triunfo de la derecha en Ecuador. <<https://n9.cl/kcb4>>
- Ruíz Acosta, Miguel (2017). *Patrón de reproducción de capital y clases sociales en el Ecuador contemporáneo, 1972-2015*. México: UNAM.
- Saltos Galarza, Napoleón (2001). Movimiento indígena y movimientos sociales: Encuentros y desencuentros. *Boletín RIMAY* (27). <<http://icci.nativeweb.org/boletin/27/saltos.html>>
- Sánchez Perugachi, Paola (2013). Resistencia, consenso y disputa: reflexión sobre el conflicto social en el Ecuador (1990-2012). En Stalin Herrera Revelo et al. (2013), ¿A quién le importa los guayacanes? Acumulación, gobierno y conflictos en el campo. Quito: Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) – Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES). <<https://goo.gl/qM46JM>>
- Sarmiento, Manolo (4 de enero de 2021). La gran farsa de la anulación de las firmas de la consulta por el Yasuní. *GK.city periodismo de investigación*. <<https://gk.city/2021/01/04/anularon-firmas-yasunidos-2014/>>
- Turner, Mark (1990). Disolución de la hacienda, luchas campesinas y mercado de tierras en la sierra central del Ecuador: Cantón Colta, provincia de Chimborazo. *Ecuador Debate*, (20), 69-145.

- Valarezo, Galo Ramón (1993). Ese secreto poder de la escritura En Iliana Almeida (1993), *Indios: Una reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990*. Quito: ILDIS.
- Velasco, Fernando (1979). Reforma Agraria y movimiento campesino indígena en la Sierra. Quito: editorial El Conejo.
- Zamosc, León (1993). Protesta Agraria y movimiento indígena en la Sierra ecuatoriana. En José Almeida, *Sismo étnico en el Ecuador: varias perspectivas*. Quito: CEDIME - Abya Yala.

Periódicos y medios

- ANRed (2019). Ecuador: Lenín Moreno persigue a comunicadores y opositores políticos. *Agencia de Noticias RedAcción*. <https://n9.cl/ug7ck>
- Asamblea Popular (21 de agosto de 2017). Resoluciones de la Asamblea Popular. *El Comercio* (Quito). <https://goo.gl/n7MVkz>
- CONAIE (14 de marzo de 2012). Estos son los pedidos de la marcha. *El Comercio* (Quito). <https://n9.cl/qaegn>
- Hoy* (29 de junio de 1990). Gobierno contestó punto por punto los pedidos indígenas. (Quito), 5A.

- Correa, Rafael (2020). *Punto Noticias*. <<https://bit.ly/2TVXhLr>>
- Correa, Rafael (17 de octubre de 2009). El Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Ec. Rafael Correa Delgado habla sobre la Minería en su enlace ciudadano N° 142. Quito: Ministerio de Recursos No Renovables. <<https://n9.cl/l9rn0>>
- Moreno, Lenin (s/r). Rafael Correa es uno de los mejores hombres que ha tenido la Patria. *Presidencia de la Republica*. <<https://n9.cl/g3p9j>>
- Los Periodistas*. (2020). El Camaleón, especial de Los Periodistas ¿Quién es realmente Carlos (Yaku) Pérez? ¿terrorismo? ¿CIA? *Pichincha Universal* (Quito).
- Pérez Guartambel, Carlos (Yaku) (2017). Carlos Pérez Guartambel, destacó que es preferible un banquero a una dictadura. *El Universo* (Guayaquil). <https://n9.cl/sxd8l>. *El País*. (5 de febrero de 1991). Mireya Cárdenas se entregó a las autoridades (Madrid). *El Comercio* (2 de agosto de 2015). (Quito).

Siglas

C-CONDEM	Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar
CIDH	Comisión Interamericana de Derecho Humanos
CMS	Articulación con la Coordinadora de Movimientos Sociales
CNC	Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro
CNDVS	Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía
CNE	Consejo Nacional Electoral
CODAE	Corporación de Desarrollo del Pueblo Afroecuatoriano
CODENPE	Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
CONAIE	Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador

CONFENIAE	Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
CONFUNASSC	Confederación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino
CONPLADEIN	Consejo de Planificación de los Pueblos Indígenas y Negros
CPCCS	Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
CPCCS-t	Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio
CREO	Partido Creando Oportunidades
FEI	Federación Ecuatoriana de Indios
FEINE	Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador
FENACLE	Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador
FENOC	Federación Nacional de Organizaciones Campesinas
FENOCIN	Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas
FODEPI	Fondo de Desarrollo Indígena del Ecuador

FODERUMA	Fondo de Desarrollo Rural Marginal
FRESMIGE	Frente de Resistencia Sur a la gran minería en Ecuador
FUT	Frente Unitario de Trabajadores
ICCI	Instituto Científico de Culturas Indígenas
ID	Partido Izquierda Democrática
IERAC	Instituto Ecuatorianos de Reforma Agraria y Colonización
MICC	Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi
MUPP-NP	Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País
OPIP	Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza
PCMLE	Partido Comunista Leninista del Ecuador
PRODENIPE	Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador
PRONERI	Programa de Negocios Inclusivos Rurales
PSC	Partido Social Cristiano
TLC	Tratado de Libre Comercio
UNES	Partido Unión por la Esperanza

Sobre el autor

Stalin Herrera Revelo es candidato a doctor en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Master en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Sociólogo en la Universidad Central del Ecuador. Investigador asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos desde 2007; trabaja temas relacionados con movimientos indígenas campesinos y las transformaciones en el campo.

Los movimientos indígenas son un actor fundamental en la dinámica política de América Latina: desde mediados del siglo XX, desde Chiapas a la Patagonia, indígenas, campesinos y mujeres rurales se han movilizad y han puesto en debate sus proyectos, demandas y sueños. En esa enorme geografía de disputas, el movimiento indígena ecuatoriano, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) a la cabeza, ocupa un lugar destacado, ya que desde el levantamiento de Inti Raymi en 1990, se convirtió en el actor político más importante de las tres últimas décadas. Sin embargo, más allá de sus épicos levantamientos y marchas, las historias de los movimientos sociales también están plagadas de contradicciones, ambivalencias y ambigüedades.

Este libro intenta construir un relato de este proceso y expone sus contradicciones en la perspectiva de abrir preguntas que nos permitan enlazar su historia con la complejidad de sus luchas y con un futuro abierto.

ISBN 978-987-813-296-9



 **CLACSO**